

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

41ª REUNIÓN — 20ª SESIÓN ORDINARIA — 13 DE NOVIEMBRE DE 1991

Presidencia del señor vicepresidente 1º del Honorable Senado,
doctor LUIS A. J. BRASESCO,

del señor vicepresidente 2º del Honorable Senado,
doctor JUAN RAMÓN AGUIRRE LANARI,

y del señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda,
doctor JUAN CARLOS ROMERO

Secretarios: señores HUGO RAÚL FLOMBAUM y ÁNGEL LEÓNIDAS ABASTO

Prosecretarios: señores MARIO DÉLFOR FASSI y DONALDO ANTONIO DIB

PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan Ramón
BENÍTEZ, Alfredo L.
BRASESCO, Luis A. J.
BRAVO, Leopoldo
BRAVO HERRERA, Horacio F.
BRITOS, Oraldo N.
CONCHEZ, Pedro A.
COSTANZO, Remo José
FIGUEROA, José Oscar
GASS, Adolfo
GENOUD, José
GROSSO, Edgardo Roger M.
GURDULICH de CORREA, Liliana
JIMÉNEZ MONTILLA, Arturo I.
LAFFERRIÈRE, Ricardo E.
LEÓN, Luis Agustín
LOSADA, Mario Aníbal
LUDUEÑA, Felipe
MAC KARTHY, César
MALHARRO de TORRES, Margarita
MARÍN, Rubén Hugo
MAZZUCCO, Faustino M.
MOLINA, Pedro E.

NIEVES, Rogelio J.
OTERO, Edison
POSLEMAN, Eduardo A.
RIVAS, Olijela del Valle
RODRÍGUEZ SAÁ, Alberto J.
ROMERO, Juan Carlos
RUBEO, Luis A.
SAADI de DENTONE, Alicia
SAMUDIO GODOY, Wilfrido
SÁNCHEZ, Libardo N.
SAPAG, Elías
SOLANA, Jorge D.
STORANI, Conrado
TRILLA, Juan
VACA, Eduardo P.
VELÁZQUEZ, Héctor

AUSENTES, CON AVISO:

JUÁREZ, Carlos A.
ROMERO FERIS, José A.

EN COMISION:

AMOEDO, Julio A.
BITTEL, Deolindo F.
MENEM, Eduardo
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito

SUMARIO

1. **Manifestaciones en minoría.** (Pág. 3936.)
2. Por invitación del señor presidente del Honorable Senado, el señor senador por el Neuquén don Elías Sapag procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Pág. 3937.)
3. **Moción del señor senador Rodríguez Saá** para fijar el plan de labor para la sesión de la fecha. Se aprueba. (Pág. 3937.)
4. De acuerdo con el plan de labor aprobado en el punto anterior de este sumario, se vota y aprueba el pase a cuarto intermedio para mañana a las 15 y 30 una vez terminada esta reunión. (Pág. 3937.)
5. **Moción del señor senador Britos** para agregar el plan de labor de la sesión de la fecha el proyecto de ley en revisión referido al pago en cuotas con bonos a jubilados que así lo hubieran acordado con el sistema de previsión social. (C.D.-82/91.) Se aprueba. (Pág. 3937.)
6. **Sesión secreta.** (Pág. 3938.)
7. **Moción de preferencia** formulada por el señor senador Aguirre Lanari para considerar en la sesión del miércoles 17 del corriente el proyecto de ley sobre seguridad interior. (C.D.-31/91.) Se aprueba. (Pág. 3938.)
8. **Asuntos entrados:**
 - I. **Mensajes del Poder Ejecutivo** por los que se solicitan acuerdos. (P.E.-356, 357, 367, 369 y 370/91.) (Pág. 3938.)
 - II. **Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo** por el que se aprueba el Acuerdo con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para la Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Atómica. (P.E.-358/91.) (Página 3938.)
 - III. **Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo** por el que se aprueba la Enmienda del Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono. (P.E.-359/91.) (Pág. 3941.)
 - IV. **Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo** por el que se aprueban las actas del XX Congreso de la Unión Postal Universal. (P.E.-368/91.) (Pág. 3949.)
 - V. **Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo** por el que se aprueba la Convención de Cooperación Judicial con la República Francesa. (P.E.-371/91.) (Pág. 3950.)
 - VI. **Comunicaciones de la Presidencia de la Nación.** (Pág. 3953.)
 - VII. **Proyecto de ley en revisión** por el que se declara zona de desastre al territorio de Santa Cruz. (C.D.-99/91.) (Pág. 3953.)

- VIII. **Proyecto de ley en revisión** por el que se aprueba el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. (C.D.-100/91.) (Pág. 3955.)
- IX. **Proyecto de ley en revisión** por el que se modifica la ley 23.555 (Feriados nacionales. (C.D.-101/91.) (Pág. 3962.)
- X. **Proyecto de ley en revisión** por el que se crea un juzgado federal de primera instancia en Quilmes, Buenos Aires. (C.D.-102/91.) (Pág. 3962.)
- XI. **Proyecto de ley en revisión** por el que se crea la Comisión Nacional de Automovilismo y Motociclismo Deportivo. (C.D.-103/91.) (Pág. 3963.)
- XII. **Proyecto de ley en revisión** por el que se cede un inmueble a la Municipalidad de Rosario, Santa Fe, para la ampliación del Parque Nacional a la Bandera. (C.D.-104/91.) (Pág. 3963.)
- XIII. **Proyecto de ley en revisión** por el que se modifica la ley 20.957 (Servicio Exterior de la Nación), incorporándose la figura de cónsul honorario. (C.D.-105/91.) (Página 3964.)
- XIV. **Proyecto de ley en revisión** por el que se dispone la erección de un templete en el Salón Azul del Congreso de la Nación, donde se conserven y exhiban al público los originales de la Constitución Nacional. (C.D.-106/91.) (Pág. 3964.)
- XV. **Proyecto de ley en revisión** por el que se crea un juzgado federal de primera instancia en Necochea, Buenos Aires. (C.D.-107/91.) (Pág. 3964.)
- XVI. **Proyecto de ley en revisión** por el que se declara de carácter obligatorio y de interés nacional la lucha contra el uso indebido del alcohol. (C.D.-108/91.) (Pág. 3965.)
- XVII. **Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.** (Pág. 3967.)
- XVIII. **Comunicaciones oficiales.** (Pág. 3968.)
- XIX. **Dictámenes de comisiones.** (Pág. 3968.)
- XX. **Peticiones particulares.** (Pág. 3970.)
- XXI. **Proyecto de comunicación del señor senador Conchez** por el que se solicita un subsidio para la "Fundación Generación 2000". (S.-964/91.) (Pág. 3970.)
- XXII. **Proyecto de comunicación del señor senador Lafferrière y otros señores senadores** por el que se solicita la realización de reuniones de coordinación del Grupo de Parlamentarios Argentinos en el marco del Tratado de Asunción (Mercosur). (S.-965/91.) (Pág. 3971.)

- XLIV. Proyecto de ley del señor senador Brasesco por el que se denomina al complejo ferroviario Zárate-Brazo Largo con el nombre de "Fermín Jesús Garay". (S.-989/91.) (Pág. 3990.)
- XLV. Proyecto de comunicación del señor senador Conchez por el que se solicita la profundización del acceso marítimo del puerto de Quequén, Buenos Aires. (S.-990/91.) (Pág. 3990.)
- XLVI. Proyecto de ley de la Comisión Bicameral ley 23.966 sobre jubilaciones de integrantes de los poderes del Estado. (S.-991/91.) (Pág. 3991.)
- XLVII. Proyecto de ley de la Comisión Bicameral ley 23.966 sobre jubilaciones de investigadores científicos y personal del servicio exterior. (S.-991/91.) (Pág. 3996.)
- XLVIII. Proyecto de ley de la Comisión Bicameral ley 23.966 sobre jubilaciones del sector docente. (S.-991/91.) (Pág. 3997.)
- XLIX. Proyecto de ley de la Comisión Bicameral ley 23.966 sobre regímenes especiales de jubilaciones. (S.-991/91.) (Pág. 3998.)
- L. Proyecto de resolución de la Comisión Bicameral ley 23.966 sobre compensación rescacitoria temporaria para legisladores nacionales. (S.-991/91.) (Pág. 3998.)
- LI. Proyecto de ley del señor senador Costanzo por el que se transfiere un inmueble del Estado a la Universidad Nacional del Comahue, Río Negro. (S.-992/91.) (Pág. 3998.)
- LII. Proyecto de ley del señor senador Lafferrière por el que se derogan aranceles de importación de papel para diarios, revistas libros y folletos. (S.-994/91.) (Pág. 3999.)
- LIII. Proyecto de ley del mismo señor senador por el que se derogan aranceles para la importación de revistas, libros y folletos. (S.-998/91.) (Pág. 4000.)
9. Homenaje al Día del Taquígrafo. (Pág. 4000.)
10. A moción del señor senador Britos se considera sobre tablas y se aprueba con modificaciones el dictamen de la Comisión Bicameral creada por la ley 23.966 en el proyecto de ley sobre jubilaciones de integrantes de los tres poderes del Estado y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. (S.-991/91.) (Pág. 4001.)
11. A moción del mismo señor senador se considera sobre tablas y se aprueba con modificaciones el dictamen de la Comisión Bicameral creada por la ley 23.966 en el proyecto de ley sobre jubilaciones de investigadores científicos y personal del servicio exterior. (S.-991/91.) (Pág. 4002.)
12. A moción del mismo señor senador se considera sobre tablas y se aprueba con modificaciones el dictamen de la Comisión Bicameral creada por la ley 23.966 en el proyecto de ley relacionado con las jubilaciones del sector docente. (S.-991/91.) (Pág. 4002.)
13. A moción del mismo señor senador se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen de la Comisión Bicameral creada por la ley 23.966 en el proyecto de ley referido a regímenes diferenciales por insalubridad, tareas penosas y riesgosas o determinantes de vejez prematura. (S.-991/91.) (Pág. 4002.)
14. A moción del mismo señor senador se considera sobre tablas y se aprueba con modificaciones el proyecto de resolución vinculado con la compensación rescacitoria temporaria para legisladores nacionales. (S.-991/91.) (Pág. 4002.)
15. Consideración del dictamen en mayoría de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Legislación General, de Asuntos Administrativos y Municipales, de Relaciones Exteriores y Culto y de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de Ley Nacional de Empleo. (P.E.-269/90, S.-158 y 932/89 y S.-523 y 886/90.) Se aprueba. (Pág. 4003.)
16. A moción del señor senador Molina se considera sobre tablas y se aprueba por la Cámara constituida en comisión el proyecto de ley en revisión por el que se declara zona de desastre a un sector del territorio de la provincia de Santa Cruz debido a la erupción del volcán Hudson. (C.D.-99/91.) (Pág. 4031.)
17. Consideración en general del dictamen de las comisiones de Educación, de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de la señora senadora Rivas y del señor senador Romero Feris sobre transferencia de servicios educativos a las provincias. (S.-832/91.) (Pág. 4036.)
18. Apéndice:
Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 4061.)

— En Buenos Aires, a las 17 y 15 del miércoles 13 de noviembre de 1991:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Presidente (Brascesco). — La Presidencia solicita a los señores presidentes de bloque que gestionen la rápida presencia de los señores senadores de las diferentes bancadas, para que pueda dar comienzo la sesión, ya que nos encontramos excedidos del término que fija el reglamento y correspondería levantarla por falta de quórum. La Presidencia está dispuesta a proceder así si ello es necesario.

que se le introduzca en este cuerpo, implicaría una demora en su sanción definitiva.

Por ello, pido que el proyecto se apruebe tal cual está, sin perjuicio de que después, mediante otra ley, ampliemos la zona de desastre a toda la provincia, como creo que es conveniente hacerlo.

Sr. Presidente (Brasesco). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Sánchez. — El argumento que acaba de esgrimir el señor senador por Santa Cruz es válido: no podemos seguir demorando las soluciones. En consecuencia, retiro la moción que había presentado.

— Se leen y aprueban los artículos 2º a 9º.

— El artículo 10 es de forma.

Sr. Presidente (Brasesco). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

17

TRANSFERENCIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS NACIONALES A LAS PROVINCIAS

Sr. Presidente (Brasesco). — De acuerdo con el plan de labor parlamentaria aprobado, corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Educación, de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de la señora senadora Rivas y del señor senador Romero Feris sobre transferencia de servicios educativos nacionales.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Flombaum). — (Lee)

Dictamen de comisiones

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Educación, Asuntos Constitucionales, Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley de los señores senadores Olijela del Valle Rivas y José Romero Feris sobre transferencia de servicios educativos nacionales; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan aprobar el siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Capítulo I

De la transferencia

Artículo 1º — El Poder Ejecutivo nacional transferirá gradualmente y en forma total o parcial, a las provin-

cias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, los servicios educativos administrados en forma directa por el Ministerio de Cultura y Educación y por el Consejo Nacional de Educación Técnica, así como también las facultades y funciones sobre los establecimientos privados reconocidos, en las condiciones que prescribe esta ley.

Art. 2º — Los requisitos específicos de las transferencias se establecerán mediante convenios a celebrarse entre el Poder Ejecutivo nacional y cada una de las jurisdicciones, en los que se acordará toda otra cuestión no prevista en la presente ley de acuerdo con las necesidades y posibilidades de cada jurisdicción. Dichos convenios serán refrendados según la normativa vigente en cada una de las jurisdicciones por medio de las legislaturas provinciales.

Art. 3º — Las jurisdicciones receptoras, con el apoyo sostenido del Poder Ejecutivo nacional, deberán cumplir todos los derechos y obligaciones vigentes en materia educativa. El Estado nacional garantizará que los servicios transferidos sean prestados con óptima cobertura cuantitativa, alta calidad pedagógica y equidad en todas las jurisdicciones.

Art. 4º — Las transferencias que se convengan se efectuarán sin otro cargo que los que establece la presente ley e importarán la sucesión a título universal de los derechos y obligaciones.

Capítulo II

De los bienes transferidos

Art. 5º — La transferencia de los servicios educativos a cada una de las jurisdicciones comprenderá los bienes libres de todo gravamen actualmente afectados al Ministerio de Cultura y Educación y al Consejo Nacional de Educación Técnica, a saber:

- a) El dominio y todo otro derecho que el gobierno nacional tenga sobre los bienes inmuebles y sus accesorios, cualquiera sea el origen de sus derechos, con destino actual o previsto para establecimientos educativos y organismos de apoyo al sistema educativo;
- b) Los bienes muebles de todo tipo, incluyendo equipos, semovientes y elementos de uso y consumo regular;
- c) La documentación y todo otro antecedente relativo a los inmuebles y muebles transferidos que sean de utilidad a las jurisdicciones receptoras;
- d) Los contratos de locación de cosas, obras y servicios, sin perjuicio de las adecuaciones contractuales necesarias a fin de mantener la continuidad de los servicios;
- e) Los bienes de cualquier naturaleza que, en el futuro, se integren al patrimonio del Estado nacional provenientes del régimen de herencias vacantes.

Art. 6º — No serán transferidos los juicios pendientes ni las deudas que por cualquier causa hubiera contraído la Nación a la fecha de la transferencia.

Art. 7º — En el caso de que el dominio y/o la propiedad de los bienes inmuebles y/o muebles y/o derechos que se transfieran provengan de donaciones o legados con cargo, la jurisdicción receptora garantizará su cumplimiento y los derechos de quienes resulten beneficiarios de tales cargos.

Capítulo III

Del personal transferido

Art. 8º — El personal docente, técnico, administrativo y de servicios generales que se desempeñe en los servicios que se transfieren quedará incorporado a la administración provincial o municipal en su caso, de conformidad con las siguientes bases:

- a) Identidad o equivalencia en la función, jerarquía y situación de revista en que se encontrare a la fecha de la transferencia;
- b) Retribución por todo concepto no inferior a la que se perciba al momento de la transferencia y equiparación a la escala salarial jurisdiccional;
- c) Reconocimiento de la antigüedad en la carrera y en el cargo, ya sea en carácter de titular, interino o suplente;
- d) Reconocimiento a la estabilidad en el cargo u horas cátedra que desempeñe al tiempo de la transferencia cuando revistiere en calidad de titular; si fuere interino, cuando se encuentre en proceso de titularización y/o concurso;
- e) Reconocimiento de títulos y antecedentes profesionales valorables para concurso de la carrera docente en equivalencia de condiciones con las vigentes para los docentes de la jurisdicción receptora.

Art. 9º — Las jurisdicciones podrán convenir mecanismos para facilitar al personal transferido optar por continuar en la Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD), en cuyo caso el gobierno de la jurisdicción deberá actuar como agente de retención de los correspondientes aportes, o incorporarse a la obra social de la jurisdicción receptora.

Art. 10. — A los efectos previsionales, las jurisdicciones receptoras reconocerán los servicios prestados por el personal en el orden nacional. Los docentes transferidos que no reúnan los requisitos exigidos en la jurisdicción receptora, podrán continuar efectuando aportes al sistema nacional de previsión; las jurisdicciones serán agentes de retención de los mencionados aportes.

Art. 11. — El personal docente transferido continuará en la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente; el gobierno de la jurisdicción receptora actuará como agente de retención de los aportes.

Art. 12. — Las cuestiones disciplinarias referidas al personal transferido suscitadas hasta el momento de efectivizarse la transferencia, serán resueltas según la normativa vigente al momento de ocurrir los hechos que las motivaron y en la jurisdicción de origen en un plazo no mayor de un año con posterioridad a la firma del convenio; las jurisdicciones receptoras aplicarán las sanciones y/o medidas que la jurisdicción de origen hubiera resuelto.

Art. 13. — Los concursos de docentes a ser transferidos, como así también los procedimientos de traslados, titularizaciones y jubilaciones, pendientes de resolución que pudieren existir al momento de promulgarse esta ley, deberán quedar resueltos en un plazo no mayor de un año.

Capítulo IV

Del financiamiento

Art. 14. — La ley de presupuesto general para la administración nacional preverá los recursos suficientes para el financiamiento integral de los servicios transferidos.

Art. 15. — Las jurisdicciones garantizarán mediante los recursos percibidos la atención de los servicios educativos transferidos.

Art. 16. — Dichos fondos podrán ser incrementados, en un índice que establecerá cada convenio en particular, atendiendo a los costos adicionales que cada jurisdicción deberá afrontar por:

- a) La adecuación del personal transferido a la política salarial vigente en la jurisdicción;
- b) Mayores gastos de administración, supervisión y/u otros que surjan como consecuencia de la transferencia.

Art. 17. — Cuando el incremento de los gastos de una jurisdicción originados en la transferencia de los servicios educativos sea superior a los recursos percibidos, el Poder Ejecutivo nacional financiará la respectiva diferencia, la que será girada mensualmente a la jurisdicción que correspondiere.

Art. 18. — Las jurisdicciones mantendrán como mínimo los aportes a la educación privada en las condiciones, montos y destinos en vigencia al momento de la transferencia, sin perjuicio de los que corresponda acordar según el régimen instituido en cada jurisdicción.

Art. 19. — Las obras públicas que se encuentren en ejecución o en trámite licitatorio o proyectadas por parte de las Nación con destino a los servicios a transferir, serán continuadas y finalizadas por la Nación. A su término dichos inmuebles serán transferidos a la jurisdicción en los términos de la presente ley.

Art. 20. — El Poder Ejecutivo nacional, a solicitud de cada jurisdicción, podrá asignar un monto global para reparaciones de los edificios transferidos cuyo estado de conservación o antigüedad afecte el desenvolvimiento del servicio educativo. Los montos serán acordados en los respectivos convenios.

Capítulo V

Aspectos pedagógicos

Art. 21. — Hasta tanto se sancione la ley de educación, el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Cultura y Educación, definirá las políticas y estrategias del sistema educativo nacional, en consulta permanente con el Consejo Federal de Cultura y Educación, y coordinará, compatibilizará y evaluará el funcionamiento interjurisdiccional.

Art. 22 — El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Cultura y Educación, en ejercicio de su competencia, realizará el análisis, evaluación y seguimiento de la situación educativa; de la consistencia, congruencia y calidad educativas de los planes y programas en la materia en relación con las prioridades establecidas; brindará asistencia técnica y financiera para el desarrollo de estrategias y programas educativos; atenderá y gestionará los asuntos de naturaleza internacional que se relacionen con la educación y la cultura; determinará los requerimientos y condiciones para el reconocimiento de títulos y certificados nacionales y extranjeros; organizará y administrará un sistema de información cualitativa y cuantitativa en materias educativa y cultural e instrumentará planes y programas de interés nacional.

Art. 23 — El Ministerio de Cultura y Educación promoverá concertadamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación la adecuación de la estructura común del sistema educativo, la actualización de planes generales con objetivos y contenidos curriculares básicos y comunes con aportes que consideren las particularidades regionales, provinciales y de la escuela y su comunidad, a fin de establecer un marco de coherencia, unidad e integración educativa y cultural del país en un pleno respeto del federalismo.

Capítulo VI

Disposiciones transitorias

Art. 24 — El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Cultura y Educación, podrá celebrar los actos jurídicos necesarios para el eficaz cumplimiento de la presente ley.

Art. 25. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo con los términos del artículo 111 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 30 de octubre de 1991.

Olijela del Valle Rivas. — Eduardo P. Vaca. — Juan C. Romero. — Alberto J. Rodríguez Saá. — Liliana I. Gurdulich de Correa. — César Mac Karthy. — Rogelio J. Nieves. — Pedro E. Molina. — Libardo N. Sánchez. — Julio A. Amoedo. — Alfredo L. Benítez. — Rubén H. Marín. — José A. Romero Feris. — Arturo I. Jiménez Montilla. — Eduardo Menem. — Wilfrido Samudio Godoy. — Juan R. Aguirre Lanari. — Felipe Luqueña.

ANTECEDENTE

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Transferencia de servicios educativos nacionales

Capítulo I

De la transferencia

Artículo 1º — El Poder Ejecutivo nacional transferirá gradualmente y en forma total o parcial, a las provin-

cias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, los servicios educativos administrados en forma directa por el Ministerio de Cultura y Educación y por el Consejo Nacional de Educación Técnica, como así también las facultades y funciones sobre los establecimientos privados reconocidos, en las condiciones que prescribe esta ley.

Art. 2º — Las condiciones específicas de las transferencias se establecerán mediante convenios a celebrarse entre el Poder Ejecutivo nacional y cada una de las jurisdicciones, en los que se acordará toda otra cuestión no prevista en la presente ley de acuerdo a las necesidades y posibilidades de cada jurisdicción.

Art. 3º — Las jurisdicciones receptoras, con el apoyo sostenido del Poder Ejecutivo nacional, se comprometen a cumplir todos los derechos y obligaciones vigentes en materia educativa. La Nación garantizará que los servicios transferidos sean prestados con óptima cobertura cuantitativa, alta calidad pedagógica y equidad en todas las jurisdicciones.

Art. 4º — Las transferencias que se convengan se efectuarán sin otro cargo que los que establece la presente ley, e importarán la sucesión a título universal en los derechos y obligaciones.

Capítulo II

De los bienes transferidos

Art. 5º — La transferencia de los servicios educativos a cada una de las jurisdicciones, comprenderá los bienes libres de todo gravamen actualmente a cargo del Ministerio de Cultura y Educación y del Consejo Nacional de Educación Técnica, a saber:

- a) El dominio y todo otro derecho que el gobierno nacional tenga sobre los bienes inmuebles y sus accesorios, cualquiera sea el origen de sus derechos, con destino actual o previsto para establecimientos educacionales y organismos de apoyo al sistema educativo;
- b) Los bienes muebles de todo tipo, incluyendo equipos, semovientes y elementos de uso y consumo regular;
- c) La documentación y todo otro antecedente relativo a los inmuebles y muebles transferidos que sean de utilidad a las jurisdicciones receptoras;
- d) Los contratos de locación de cosas, obras y servicios, no obstante cualquier disposición contractual que lo impidiera.

Art. 6º — No serán transferidos los juicios pendientes ni las deudas que por cualquier causa hubiera contraído la Nación a la fecha de la transferencia.

Art. 7º — En el caso de que el dominio y/o la propiedad de los bienes inmuebles y/o muebles y/o derechos que se transfieran provengan de donaciones o legados con cargo, la jurisdicción receptora garantizará

su cumplimiento y los derechos de quienes resulten beneficiarios de tales cargos.

Capítulo III

Del personal transferido

Art. 8º — El personal docente, técnico, administrativo y de servicios generales que se desempeñe en los servicios que se transfieren, quedará incorporado a la administración provincial o municipal en su caso, de conformidad con las siguientes bases:

- a) Identidad o equivalencia en la función, jerarquía y situación de revista en que se encontrare a la fecha de la transferencia;
- b) Retribución nominal total por todo concepto no inferior a la que se perciba al momento de la transferencia y equiparación a la escala salarial jurisdiccional;
- c) Reconocimiento de la antigüedad en la carrera y en el cargo, ya sea en carácter de titular, interino o suplente;
- d) Reconocimiento a la estabilidad en el cargo que desempeñe al tiempo de la transferencia cuando revistiere en calidad de titular; si fuere interino, cuando tenga afectado el cargo u horas de cátedra;
- e) Reconocimiento de antecedentes profesionales valorables para concurso de la carrera docente en equivalencia de condiciones que las vigentes para los docentes de la jurisdicción receptora.

Art. 9º — Las jurisdicciones podrán convenir mecanismos para facilitar al personal transferido optar por continuar en la Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD), en cuyo caso el gobierno de la jurisdicción deberá actuar como contribuyente y como agente de retención de los correspondientes aportes, o incorporarse a la obra social de la jurisdicción receptora.

Art. 10. — A los efectos previsionales, las jurisdicciones receptoras reconocerán los servicios prestados por el personal en el orden nacional. Los docentes transferidos que no reúnan los requisitos exigidos en la jurisdicción receptora, podrán continuar efectuando aportes al sistema nacional de previsión; las jurisdicciones serán agentes de retención de los mencionados aportes.

Art. 11. — El personal docente transferido continuará en la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente; el gobierno de la jurisdicción receptora actuará como agente de retención de los aportes.

Art. 12. — Las cuestiones disciplinarias referidas al personal transferido suscitadas hasta el momento de efectivizarse la transferencia, serán resueltas según la normativa vigente al momento de ocurrir los hechos que las motivaron y en la jurisdicción de origen en un plazo no mayor de un año con posterioridad a la firma del convenio; las jurisdicciones receptoras aplicarán las sanciones que la jurisdicción de origen hubiera resuelto.

Art. 13. — Los concursos de docentes a ser transferidos, como así también los procedimientos de titularizaciones y jubilaciones, pendientes de resolución que

pudieren existir al momento de promulgarse esta ley, deberán quedar resueltos en un plazo no mayor de un año.

Capítulo IV

Del financiamiento

Art. 14. — La ley de presupuesto general para la administración nacional proveerá los recursos suficientes para el financiamiento integral de los servicios transferidos.

Art. 15. — Las jurisdicciones garantizarán mediante los mayores recursos percibidos la atención de los servicios educativos transferidos.

Art. 16. — Dichos fondos podrán ser incrementados, en un índice que establecerá cada convenio en particular, atendiendo a los costos adicionales que cada jurisdicción deberá afrontar por:

- a) La adecuación del personal transferido a la política salarial vigente en la jurisdicción;
- b) Mayores gastos de administración, supervisión y/u otros que surjan como consecuencia de la transferencia.

Art. 17. — Cuando el incremento de los gastos de una jurisdicción originados en la transferencia de los servicios educativos sea superior a los recursos percibidos, el Poder Ejecutivo nacional financiará la respectiva diferencia, la que será girada mensualmente a la jurisdicción que correspondiere.

Art. 18. — Las jurisdicciones mantendrán el subsidio a la educación privada en los montos y con los destinos a las instituciones que a la fecha de promulgarse esta ley lo perciban del Poder Ejecutivo nacional.

Art. 19. — Las obras públicas que se encuentren en ejecución o en trámite licitatorio o proyectadas por parte de la Nación con destino a los servicios a transferir, serán continuadas y finalizadas por la Nación. A su término dichos inmuebles serán transferidos a la jurisdicción en los términos de la presente ley.

Art. 20. — La Nación, a solicitud de cada jurisdicción, podrá asignar un monto global para reparaciones de los edificios transferidos cuyo estado de conservación o antigüedad afecten el desenvolvimiento del servicio educativo. Los montos serán acordados en los respectivos convenios.

Capítulo V

Aspectos pedagógicos

Art. 21. — Hasta tanto se sancione la ley de educación, el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Cultura y Educación, definirá las políticas y estrategias del sistema educativo nacional, en consulta permanente con el Consejo Federal de Cultura y Educación, y coordinará, compatibilizará y evaluará el funcionamiento interjurisdiccional.

Art. 22. — El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Cultura y Educación, en ejercicio de su competencia, realizará el análisis, evaluación y seguimiento de la situación educativa nacional; de la con-

sistencia, congruencia y calidad educativas de los planes y programas en la materia en relación con las prioridades establecidas; brindará asistencia técnica y financiera para el desarrollo de estrategias y programas educativos; atenderá y gestionará los asuntos de naturaleza internacional que se relacionen con la educación y la cultura; determinará los requerimientos y condiciones para el reconocimiento de títulos y certificados nacionales y extranjeros; organizará y administrará un sistema de información cualitativa y cuantitativa en materias educativas y culturales e instrumentará planes y programas de interés nacional.

Art. 23. — El Ministerio de Cultura y Educación promoverá concertadamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación la adecuación de la estructura común del sistema educativo, la actualización de planes generales con objetivos y contenidos curriculares básicos y comunes con aportes que consideren las particularidades regionales, provinciales y de la escuela y su comunidad, a fin de establecer un marco de coherencia, unidad e integración educativa y cultural del país en un pleno respeto del federalismo.

Capítulo VI

Disposiciones transitorias

Art. 24. — El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Cultura y Educación, podrá celebrar los actos jurídicos necesarios para el eficaz cumplimiento de la presente ley.

Art. 25. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Olijela del Valle Rivas. — José A. Romero Feris.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El tema central del presente proyecto de ley está en el debate político y educativo desde hace ya largo tiempo. Son numerosos los trabajos, investigaciones, artículos, conclusiones de congresos, documentos de organismos internacionales, etcétera, que aportan ideas, recomendaciones y precisiones.

En ese sentido, tal profusa bibliografía nos impulsa a ser breves en la explicación de la intencionalidad político-educativa que nos anima al presentarlo.

La transferencia de los servicios educativos nacionales a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para lograr la descentralización y la federalización del sistema educativo. Realizada en forma correcta, contribuirá a producir una reestructuración profunda en el gobierno y la gestión, lo que redundará en el mejoramiento de la calidad y pertinencia de la educación.

Es ya consenso unánime la crítica hacia la excesiva centralización y burocratización, el alejamiento entre la realidad de la escuela y los organismos de conducción, la inorganicidad jurisdiccional por la coexistencia de sistemas diferentes (nacional y provincial) en el mismo ámbito geográfico, la superposición de esfuerzos entre distintas jurisdicciones, las dificultades adminis-

trativas por la lejanía del lugar de resolución, la segmentación producto de diferentes circuitos educativos cerrados y diferenciados, socialmente, los conflictos de competencias, etcétera.

El futuro del país está comprometido por la crisis de la educación. Es el momento de adoptar estrategias que motoricen cambios adecuados.

El objetivo es diseñar un sistema federal de educación en el que se preserve la unidad cultural y se respete la diversidad regional. Un sistema que logre homogeneizar los logros educativos, diseñar modelos pedagógicos de validez social, adecuar las orientaciones con las necesidades y requerimientos comunitarios y generar alta eficiencia en los niveles de gestión y supervisión.

La transferencia de los servicios educativos nacionales a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires es una de las estrategias fundamentales para el logro de estos fines, que son, indudablemente, fines de política educativa.

Sin embargo, también es necesario recoger las experiencias (nacionales e internacionales) sobre los riesgos de una descentralización extrema y apresurada que pueda originar efectos opuestos a los deseados, como la disgregación educativa o la agudización de las diferencias en cuanto a calidad y equidad. Nuestro país los vivió en 1978 cuando una decisión económica traspasó las escuelas primarias a las jurisdicciones.

Hoy, viviendo el país en su plenitud democrática, contamos con las posibilidades de no repetir hechos traumáticos. A ello apunta el presente proyecto, que intenta preservar todos los derechos y garantías de los sectores involucrados y compatibilizar el máximo federalismo con la integración de la Nación.

Sin desconocer que la transferencia de servicios educativos nacionales está incluida en el marco de la reforma del Estado, que se fijó como meta el Poder Ejecutivo nacional, consideramos necesario mantener la especificidad e identidad del espacio educativo en el ámbito de todas las áreas del gobierno. La transferencia de las escuelas es un hecho educativo. Por lo tanto, no corresponde que forme parte del articulado de una ley de presupuesto, pues ello sería considerar a la educación subordinada a las variables económicas.

La presente ley tiene una cierta historia y recoge varias fuentes en su redacción. La primera de ellas es la X Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Cultura y Educación, reunida en Buenos Aires en diciembre de 1989, que elaboró una serie de recomendaciones sobre los aspectos organizativos, pedagógicos y financieros a contemplar en este proceso y encomendó especialmente la elaboración de una ley específica para tal transferencia.

Asimismo, se han tenido en cuenta dos proyectos de ley presentados por los diputados Luis Alberto Martínez y Federico Clérici, estudios e informes del Consejo Federal de Inversiones y documentos de las entidades gremiales docentes.

En febrero de 1990 el Poder Ejecutivo nacional envió a este Honorable Senado el proyecto de ley de

transferencia de servicios educativos nacionales a las jurisdicciones. Fue analizado por la Comisión de Educación que convocó al señor ministro de Cultura y Educación. El profesor Salonia asistió con subsecretarios y funcionarios y respondió a inquietudes planteadas por los senadores de las distintas comisiones. Posteriormente, se convocó a una reunión del Consejo Federal de Cultura y Educación. Los ministros de Educación jurisdiccionales, sugirieron precisiones para ser discutidas en el proceso de elaboración definitivo.

Respetando sus aportes, la Comisión de Educación elaboró por consenso, varios predictámenes que no llegaron a ser discutidos en el Honorable Senado pues aún no estaban dadas las garantías financieras imprescindibles para su sanción.

Actualmente, el Poder Ejecutivo nacional ha enviado al Parlamento el proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 1992. Independientemente de los mayores montos para garantizar las transferencias allí previstos, que deberán ser debatidas en su oportunidad, es necesario previamente la sanción de esta norma que hoy presentamos y que contiene todos los requisitos para posibilitar un proceso de transferencia prolijo y ordenado.

El proyecto consta de seis capítulos. El primero se refiere al tema específico y establece la decisión política de transferir gradualmente y en forma total o parcial, los servicios educativos administrados por el Ministerio de Cultura y Educación y por el Consejo Nacional de Educación Técnica como así también las facultades y funciones sobre los establecimientos privados reconocidos. Señala la existencia de convenios bilaterales, el compromiso de las jurisdicciones a respetar la normativa vigente en materia educativa y la garantía de la Nación para preservar en la oferta educativa la calidad, cantidad y equidad.

El capítulo segundo enumera los bienes transferidos, previene el cumplimiento de los cargos en caso de legados y establece que no se transferirán juicios ni deudas pendientes.

El capítulo tercero se refiere a las garantías imprescindibles de personal transferido en lo que respecta a función, retribuciones, reconocimiento de antigüedad, estabilidad y antecedentes profesionales, obra social, jubilaciones, cuestiones disciplinarias y concursos y titularizaciones en trámite.

El capítulo cuarto propone los criterios más generales de financiamiento que luego deberán ser resueltos en la ley de presupuesto.

Señala que los recursos para las provincias receptoras deben ser suficientes para el financiamiento integral de los servicios transferidos, prevé el posible incremento de los mismos por mayores costos derivados, la financiación por parte del Poder Ejecutivo nacional de dichas diferencias, la manutención del subsidio a los establecimientos privados, la continuidad de las obras públicas en ejecución y la posibilidad de asignar, por parte de la Nación, un monto global para reparaciones de edificios.

El capítulo quinto se refiere a los aspectos pedagógicos. En un sistema federalizado, es conveniente rede-

finir las funciones del Ministerio de Cultura y Educación que, de acuerdo con el Consejo Federal de Cultura y Educación, coordinará, compatibilizará y evaluará el sistema educativo nacional, promoviendo la estructura común del sistema educativo, la actualización de planes generales con objetivos y contenidos curriculares básicos con el fin de resguardar la coherencia, unidad e integración educativa y cultural del país en el marco del federalismo.

Olijela del Valle Rivas. — José A. Romero Feris.

Sr. Presidente (Brasesco). — En consideración en general.

Tiene la palabra la señora senadora por Tucumán.

Sra. Rivas. — Señor presidente: ante la presentación por parte de los señores senadores por San Juan de un proyecto de ley sobre transferencia de los servicios educativos nacionales a las provincias, y luego de observar que su iniciativa coincide en general con el dictamen que vamos a considerar, voy a solicitar que se agreguen sus firmas al texto en consideración.

Sr. Presidente (Brasesco). — Así se hará, señora senadora.

Para realizar el informe pertinente, continúa en el uso de la palabra la señora senadora por Tucumán.

Sra. Rivas. — Señor presidente: ésta es una sesión de enorme significado para la política educacional de nuestro país y para el futuro de la educación argentina.

La consideración y posterior aprobación —si así lo deciden los señores senadores— del proyecto de ley sobre transferencia de los servicios educativos nacionales a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires permitiría la afirmación del federalismo para constituir efectivamente un sistema de educación que armonice las diversidades regionales y preserve la unidad cultural del país.

La transferencia de los servicios educativos no es un tema nuevo. Las difíciles condiciones económicas y financieras del país hicieron aconsejable la postergación de su tratamiento.

Este año el Poder Ejecutivo nacional consideró que se daban condiciones favorables para impulsar el proceso de transferencia, y por ello incluyó en el proyecto de presupuesto nacional para el año 1992.

La transferencia de servicios educativos es esencialmente tema de política educativa y no una variable de la economía. Por lo tanto, no corresponde que forme parte de la ley de presupuesto.

Es así como surgió la necesidad de elaborar una ley específica, teniendo en cuenta articulados del proyecto de ley de presupuesto, recomendaciones del Consejo Federal de Educación, de legisladores provinciales, de entidades vinculadas con la educación privada, de gremios docentes, de personalidades de la educación argentina y otras sugerencias.

—Ocupa la presidencia el señor vicepresidente 2º del Honorable Senado, senador Juan Ramón Aguirre Lanari.

Sra. Rivas. — Señor presidente, señores senadores: la sanción de este proyecto de ley permitirá llevar a cabo un ordenado proceso de transferencia, que contribuirá al mejoramiento y transformación de nuestra educación.

En él se contemplan los temas principales de la política educativa y laboral, así como también distintos aspectos pedagógicos, del gobierno de la educación y cuestiones financieras.

En esta iniciativa se garantiza al personal a transferir los derechos esenciales para el futuro desempeño de sus funciones, la retribución, la antigüedad, la estabilidad, la obra social, la jubilación, los concursos y las titularizaciones en trámite.

Si bien el articulado del proyecto contribuye para que todo lo antedicho se concrete, deseo destacar su artículo 2º. En él se establece que los requisitos específicos de las transferencias se acordarán mediante convenios a celebrarse entre el Poder Ejecutivo de la Nación y cada una de las jurisdicciones, de acuerdo con sus necesidades y posibilidades, los que serán refrendados por las respectivas legislaturas provinciales.

Señor presidente: este proyecto de ley de transferencia constituye una contribución para la futura organización del sistema educativo. El país vive actualmente en plenitud democrática; tenemos la posibilidad y responsabilidad de evitar hechos traumáticos como los que ocurrieron en 1978, cuando las escuelas primarias de la Nación se transfirieron a las distintas jurisdicciones.

Si bien todo cambio genera inquietud, cabe mencionar que este proyecto será el marco legal adecuado para una efectiva federalización que garantice el funcionamiento de los servicios y la calidad de la educación.

Por las consideraciones expuestas solicito la aprobación de este proyecto.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Tiene la palabra la señora senadora por Mendoza.

Sra. Malharro de Torres. — Señor presidente, señores senadores: escuché recién las manifestaciones vertidas por el señor senador por La Rioja, quien con su propuesta tan personal y a la vez tan importante demostró su preocupación y acompañó el planteo formulado por su par de Santa Cruz.

¿Qué pide Santa Cruz? Pide que cumplan la palabra dada; es decir que le entreguen diez millones de dólares. Santa Cruz es una provincia que prácticamente casi ha desaparecido.

Se ha hablado aquí de burocracia y de demora. En el curso de este debate pensé en la forma de plantear el tema. Me pregunté qué sucederá cuando sean transferidas las escuelas a las provincias; ya no se tratará de diez millones de dólares sino de varios más. En el caso de Mendoza, por el momento estamos en el orden de los 42 millones de dólares, sin considerar el aspecto del crecimiento de la educación del país.

¿Qué va a pasar con las escuelas, con los sueldos de los docentes, con los techos que hay que arreglar, si empieza esta desidia burocrática y no llega a las provincias el apoyo financiero que tanto se dice que se les va a dar?

Quiero retomar el fundamento de mi exposición. Parecería que éste fuera un proyecto más, que esta tarde el Senado hace un simple tratamiento de un proyecto de ley. Pero diría que es un día casi histórico, porque estamos nada más y nada menos que tratando el destino de este sistema educativo argentino, al que le podemos hacer todas las críticas que queramos pero que por lo menos existe de hecho y está consolidado en la tradición de la educación popular.

No obstante, reconozco que éste es el único instrumento legal que hasta ahora se nos ofrece con alguna garantía. En este sentido, quiero destacar el esfuerzo permanente de mi amiga y compañera de trabajo, la señora senadora Rivas, que no obstante ser justicialista —oficialista—, luchó con tesón para que en este proyecto de transferencia las provincias contaran con algunas garantías y con la esperanza de que este sistema educativo no lo tiráramos a una arena sin destino que implique que el día de mañana la Nación se tenga que volver a hacer cargo, tal como ocurrió con las escuelas Láinez ya que las provincias no pudieron asumir la educación primaria del país que crecía por las inmigraciones y el progreso. Señor presidente: tengo fama de ser tremendista y me alegro de serlo cuando se trata de defender la educación de mi país.

Señores senadores: no se sientan afectados por lo que diré, pero realmente se me pone la piel

de gallina al ver que estamos considerando prácticamente la transformación del sistema educativo argentino, y que lo tenemos que hacer apurados, en quince minutos. No sé si hablaré mucho, pero me tomaré el tiempo que sea necesario porque no quiero que la historia mañana me juzgue o que no pueda volver a mi provincia porque como senadora de la Nación por Mendoza no tomé todos los recaudos necesarios.

Empiezo por decir que hoy, en vez de estar considerando el proyecto de ley de transferencia, tendríamos que estar tratando una ley general de educación que enmarque el sistema educativo argentino. Sé que se me puede decir que en tal sentido hay proyectos en la Comisión de Educación. Por supuesto que los hay, pero la presión permanente del Ejecutivo, que transformó la solución de la educación del país en una solución de ajuste económico, ha desvirtuado todo el trabajo que debía hacer la Comisión de Educación del Senado.

Durante cuarenta años enseñé en la cátedra que en un país como el nuestro, en donde hay bolsones terribles de analfabetismo y deserción, había que descentralizar la ejecutividad y centralizar la norma orientadora para mejorar la calidad de la educación. Las escuelas no tienen el sostén edilicio necesario para su funcionamiento; los docentes abandonados a su suerte y pobrísimos el porcentaje del presupuesto dedicado a la educación.

Entonces, señor presidente, hoy me siento conmovida por el hecho de acceder a este debate así llanamente, como un problema más que hay que pasarlo rápido. Pero por lo menos quiero quedar tranquila con mi conciencia diciendo desde esta banca que estoy terriblemente preocupada por la aprobación de este proyecto de ley.

Solamente les pido que piensen en el tema anterior de Santa Cruz. En ese momento dijimos que la burocracia no iba a dejar que le llegara el auxilio económico a esa provincia, que casi muere.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Legislación General, senador Rubén Marín.

Sra. Malharro de Torres. — ¿Qué pasará cuando haya que girar los sueldos de los profesores y auxiliares, cuando haya que reparar los techos, cuando haya que reparar los viejos edificios, pagar la luz, el teléfono, los alquileres, todas cosas que muchas veces las provincias no pueden asumir?

Hablo en nombre del gobernador de mi provincia, el licenciado José Octavio Bordón, quien me ha enviado por escrito su posición, que me tomaré la licencia de leer. "Señora senadora nacional, profesora doña Margarita Malharro de Torres. Su despacho.

De acuerdo a lo conversado telefónicamente con usted, a las ideas que intercambie con los ministros de Educación y de Economía de la Nación y con otros colegas, estimo que la transferencia educativa puede realizarse en base a las siguientes ideas:

1. Estamos de acuerdo en que la Nación federalice los servicios, guardando para sí un poder de Policía que garantice una correcta prestación de los mismos y para los que transfirió los recursos.

2. Entendemos que la transferencia educativa implica un proceso pedagógico, jurídico, social y previsional que debería ponerse en marcha a partir del 1º de enero de 1993, utilizando el año 1992 para efectivizar todos estos aspectos.

3. Consideramos que los cambios estructurales que están produciendo el Estado central y los estados provinciales y municipales —aclaro que esto va por cuenta del gobernador—, exigen un contrato federal fiscal que exprese esta nueva realidad y que incorpore una verdadera 'revolución impositiva' que termine con los evasores, con la superposición de tributos y con la permanente inseguridad de los contribuyentes sobre sus futuras obligaciones.

4. Habida cuenta que el punto tres recién se podría poner en marcha en 1993, proponemos una transición para 1992 que consiste en:

- a) El gobierno central garantiza a las provincias para 1992 el promedio mensual que transfirió durante la vigencia del Plan de Convertibilidad en 1991, aproximadamente siete mil millones de dólares anuales (promedio mensual por 12).

- b) Sobre los aproximados dos mil millones de dólares más, que piensa recaudar Hacienda en 1992 —llamo poderosamente la atención sobre este ítem—, se crea un fondo de unos mil doscientos millones de dólares para que la Nación haga frente a los gastos de Educación, Salud y Políticas Sociales que desea transferir y que rendiría durante 1992.

- c) Los ochocientos millones de dólares restantes se distribuirán entre las provincias mediante el índice de Coparticipación Secundaria o por población...

Señor presidente: coincidentes con la postura del gobernador de mi provincia, que como bien

saben todos no es de mi signo político, y también con la posición del señor gobernador de Córdoba, que en carta abierta al señor presidente de la Nación expresó los recaudos y los temores que los embargan con respecto a la transferencia, hemos presentado, previa conversación con la señora senadora Rivas, un intento de modificación de algunos de los artículos para fundamentalmente darles una garantía y un reaseguro a las provincias de que los convenios serán tratados por las legislaturas provinciales.

Con esto se garantizan los legítimos derechos de las provincias y también de la Nación, porque nos movemos desde la órbita del Senado hasta el ámbito de las legislaturas provinciales. Es decir, pasamos de la Constitución Nacional, que por el artículo 67 inciso 16 permite hacer esto, a la mano de las constituciones provinciales, que tienen capítulos dedicados a la educación.

Así, siguiendo los lineamientos derivados de la preocupación de los gobernadores de Mendoza y de Córdoba, acordamos con la señora senadora Rivas agregar al artículo 1º que los convenios deberán ser refrendados, según la normativa vigente en cada una de las jurisdicciones, por medio de las legislaturas provinciales. Es decir, no nos conformamos con hacer referencia a las legislaciones provinciales sino que lo exigimos como una condición necesaria. En otras palabras, si no hay convenios tratados por las legislaturas provinciales no habrá transferencias.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador Luis A. J. Brasesco.

Sra. Malharro de Torres. — No tuvimos suerte con la señora senadora porque no pudimos acordar la incorporación de otra propuesta, en la que también coincide el gobernador de Mendoza, por la que se afirma que esta transferencia —por las razones que acabó de dar en la carta que he leído— no se puede realizar con seriedad a partir de 1992, sino que debiera realizarse a partir de 1993, de manera que se sustancie una serie de medidas que garanticen el correcto traspaso a las provincias.

Hemos sugerido que se hiciera una especie de cronograma. Es decir, proponemos que en el artículo 3º se haga referencia a lo siguiente: realizar un cronograma de transferencia de los servicios educativos por niveles y modalidades, de acuerdo con las posibilidades y necesidades de las jurisdicciones.

En otras palabras, el gobierno nacional de ninguna manera puede afectar de este modo las eco-

nomías y los presupuestos provinciales. Esto es lo que va a suceder cuando se transfieran masivamente los servicios sin haber tenido en cuenta las necesidades y posibilidades de cada provincia.

Proponemos además que esos convenios de transferencia contemplen el reconocimiento de mayores costos, en los que seguramente incurrirán todas las jurisdicciones con motivo del traspaso de servicios educativos. Esto de creer que las transferencias no van a ocasionar a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires mayores costos es francamente no tener claro el problema.

Para hacer esta propuesta hemos recogido el pedido de los gremios docentes, de los docentes en general, de los gobernadores, de los legisladores provinciales, de los concejales, de los municipios y de la población toda.

Otra sugerencia que hemos hecho está relacionada con la política salarial vigente en cada jurisdicción, a los efectos de equiparar los salarios a los que fuesen mayores. También solicitamos la refacción y puesta en condiciones de los bienes muebles e inmuebles escolares que habrán de recibirse. Si bien es cierto que en el dictamen que suscribe la señora senadora hay una referencia a esto, no está claramente explicitada nuestra preocupación.

Por otra parte, otro tema que nos tiene realmente afligidos es la situación previsional. Por ese motivo sugerimos que en el texto legal se aseguren mecanismos para la transferencia de los fondos previsionales aportados por el personal que sea transferido, o bien que se arribe a un acuerdo respecto de la situación previsional del personal a transferir. En tal sentido, el acuerdo deberá preservar la situación económico-financiera de las cajas previsionales de las distintas jurisdicciones, teniendo en cuenta el estado de ellas con anterioridad al momento de concretarse la transferencia.

Señor presidente: por último, hicimos una propuesta que es un tanto quijotesca —lo reconozco—, pero traduce una preocupación que tenemos todos: ¿qué van a hacer las provincias, una vez que se les hayan transferido los servicios educativos, si el gobierno nacional —tal como hemos visto recién con el caso de Santa Cruz— no cumple con el envío de los giros que correspondan o con las responsabilidades que deba asumir?

Nuestra propuesta pretende ser impactante porque traduce la tremenda preocupación que todos los que estamos sentados aquí tenemos al

respecto: ¿qué pasa si la Nación no cumple? Por eso hemos propuesto, reitero que de modo quijotesco, que frente al incumplimiento por parte de la Nación, se reintegrara a ella en forma automática la totalidad de los servicios educativos recibidos por la jurisdicción que fuera afectada. Reconozco que esto constituye una impronta que manifiesta la terrible preocupación que todos tenemos sobre lo que puede pasar con los servicios educativos.

Señor presidente: prometí ser breve. He cumplido con el gobierno de mi provincia y con mi conciencia al señalar que antes que esta transferencia debimos estar tratando la ley general de educación. Porque nosotros, que somos partidarios de esta transferencia —que quede bien claro, bien claro—, siempre pensamos que transferir los servicios mejoraría la educación del país. Es decir, se trataría de transferir para transformar y mejorar.

Pero ocurre que todos los días hablamos del desastre que constituye nuestro sistema educativo nacional, de lo que hay, de la falta de disciplina, de la falta de renovación. Es decir que —y discúlpeme que sea un poco grosera en la comparación— es como una especie de muerto que transferiremos bien empaquetado. ¿Y qué pasa con los muertos? Se van deshaciendo, el tiempo los va disolviendo, van desapareciendo. Y si esta transferencia se produce sin una intención de la Nación de transformar realmente el sistema educativo general de los argentinos, pregunto qué va a quedar como unidad de dicho sistema cuando en realidad tendría que haber unidad de formación cultural y de trabajo, que dé sentido al país, al pueblo de la Nación.

Vamos a aprobar en general el proyecto. La señora senadora ha aceptado dos de nuestras sugerencias, sobre las que insistiremos, por lo menos para cumplir con nuestro mandato.

Pero dejamos fuertemente señalada la preocupación de que no vaya a ocurrir que a muy corto plazo tengamos que recoger la inquietud de los señores senadores que vengan a pedir que tratemos proyectos de resolución sobre tablas porque la Nación no ha cumplido con el giro de los fondos para el sostenimiento de las escuelas. Estaremos ahí para apoyarlos pero también estaremos para ver cómo podemos transformar esta situación a la que hoy aludo, porque si no lo hiciera no cumpliría con el mandato que me han conferido.

Esto es sumamente riesgoso. Esto se lo va a llevar en la conciencia el ministro Cavallo.

Sr. Presidente (Brasesco). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: la importancia del asunto se define por sí misma porque cualquier situación que roce la educación en cualquier pueblo civilizado, y mucho más en la sociedad de conocimientos en la que vivimos, no puede ser discutida.

Pero he aquí que esto tiene más importancia porque estamos rozando un tema que tiene que ver con la esencia misma de lo que significa el Senado argentino.

Estamos tratando y discutiendo una reasunción de nuestras facultades indelegables. Pero también estamos con el lógico temor, que acabamos de escuchar en la palabra de la señora senadora por Mendoza, respecto de un problema que tampoco podemos dejar de considerar y que indudablemente a todos y a cada uno de nosotros nos ha preocupado y nos preocupa.

Estamos frente a un verdadero, no diría dilema, pero sí una suerte de colisión implícita o explícita: la colisión entre lo que preceptúa nuestra ley fundamental y aquello que nos informa una realidad económica y social que no podemos evitar en cuanto a su consideración.

—Suenan la campanilla de orden.

Sr. Presidente (Brasesco). — Ruego a los señores senadores que no dialoguen, ya que está en uso de la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Muchas gracias, señor presidente.

La Constitución argentina establece en su artículo 5º una condición fundamental...

—Suenan la campanilla de orden.

Sr. Presidente (Brasesco). — Ruego silencio a los señores senadores.

Sr. Aguirre Lanari. — ...para que la autonomía provincial sea garantizada: que las provincias aseguren su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Es decir que desde el nacimiento mismo del Estado las provincias asumen como obligación indelegable la de asegurar la educación. Pero bien pronto se vio que ésta lamentablemente era una bella aspiración cuyo cumplimiento no siempre fue posible por falta de recursos materiales. La creación de las famosas escuelas Láinez, que recordaba recién la señora senadora por Mendoza, fue la respuesta inevitable a una necesidad primaria que las provincias debían atender pero no estaban en condiciones de hacerlo.

Este es el drama que a todos nos acucia, la preocupación que a todos nos embarga cuando vamos a dar un paso tan trascendente como éste. Queremos cumplir con esa obligación constitucional primaria, pero no dejamos de advertir con preocupación que esta responsabilidad a la que la Nación nos compele nos provoca a las provincias legítimas dudas en cuanto a nuestra capacidad de asumirla adecuadamente.

Es evidente que el gobierno de la Nación está en tren de sacarle obligaciones al Estado nacional a los efectos de equilibrar el presupuesto, cosa que considero excelente. De esta manera se encauza nuestra economía por los rumbos que toda buena doctrina exige. Pero no es cuestión de que el Estado nacional argentino sane su presupuesto haciendo que las provincias asuman obligaciones que quizá no están en condiciones de cumplir. Por consiguiente, es absolutamente justificado el reclamo que se ha venido haciendo para que en el caso de que las provincias vean ampliados sus deberes, tengan los medios para cumplirlos adecuadamente; evitándose así no solamente la frustración de los objetivos en materia de educación sino también la frustración económica que un desequilibrio en los presupuestos provinciales implicaría para el interior del país.

No es necesario extremar el análisis para saber qué problemas trae aparejados esta transferencia que se proyecta. Tenemos el problema de cuáles son los recursos suficientes desde el punto de vista estrictamente económico; el de la situación de los docentes y en particular el de su régimen previsional, en lo que se refiere a las obligaciones que asume el Estado receptor, la jurisdicción receptora y en cuanto a la mayor seguridad que los presuntos beneficiarios tienen con este cambio de estado, el de los concursos pendientes, el de los edificios, el de las obligaciones que se asumen. Todo esto sin duda alguna, en forma meritoria y elogiable, está reflejado en el articulado del proyecto que es sometido a nuestra consideración.

Pero no podemos negar que se trata de un asunto delicado que no puede ser legislado mediante una simple ley de presupuesto de objetivo meramente económico y circunstancial en el tiempo. Se necesita una ley especial, como la de educación que reclama la señora senadora por Mendoza.

El tema de la transferencia de los servicios educativos a las provincias está ínsito en todas las organizaciones constitucionales provinciales. La Constitución de mi provincia —Corrientes— tiene una disposición especial: en el artículo 174

se estableció previsoriamente por el convencional constituyente de mi provincia que un mínimo del 25 por ciento del total de los recursos del Estado tienen que ser volcados precisamente a atender las necesidades de la educación. Si bien es cierto que algunos problemas generados por la transferencia —como los que estamos ahora estudiando— han sido motivo de previsión en el proyecto que nosotros consideramos, existen algunos interrogantes, como por ejemplo el de los servicios previsionales.

El artículo 11 establece que el personal docente transferido va a continuar en la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente. Esta cuestión ha sido legislada exitosamente en el orden nacional; pero estimo que no lo está en el ámbito provincial. Ello implica que pueden producirse situaciones difíciles, incluso de desigualdad, entre los docentes que ingresan en una nueva jurisdicción y aquellos que ya se encuentran en ella y carecen de un organismo de estas características.

Todo esto muestra, señor presidente, que quizá nosotros mismos, por muy cuidadosos que seamos, que hayamos sido o podamos serlo en las mejoras que eventualmente se puedan introducir en la discusión en particular de este proyecto, no vayamos a ser lo suficientemente comprensivos como para asumir todos los problemas y mucho menos para resolverlos con ecuanimidad y prudencia.

Pero sí me queda una mayor tranquilidad al saber lo que en el proyecto se establece en cuanto a que no será impuesta a las provincias esta transferencia sino que tendrá que ser materia de un convenio entre la Nación y los entes receptores.

Coincido con la propuesta que ha efectuado la señora senadora por Mendoza en cuanto a que sea la Legislatura provincial la que se ocupe, con el concurso de todas las opiniones políticas representadas, de discutir con total independencia de colores partidarios la transferencia, dentro de los recaudos y límites que exigimos, en beneficio no sólo de la educación sino de las propias provincias.

Sra. Rivas. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Aguirre Lanari. — Sí, señora senadora.

Sr. Presidente (Brasescò). — Tiene la palabra la señora senadora por Tucumán.

Sra. Rivas. — Le aclaro al señor senador que el artículo 2º del proyecto dice que estos convenios van a ser refrendados por las Legislaturas provinciales.

Sr. Aguirre Lanari. — Justamente yo decía que coincido con eso, porque evidentemente no sólo será la voluntad del Poder Ejecutivo provincial sino también la del Poder Legislativo provincial la que venga a considerar este acto tan grave como significa la transferencia de las escuelas. Por estas razones, creo que lo que se prevé en los artículos 3º, 5º, 14, 16, 17 y 19 en cuanto a la cobertura de los insumos que va a ocasionar dicha transferencia trae la convicción o la esperanza de que vamos a legislar adecuadamente un asunto tan serio que evidentemente va a ser beneficioso con este mecanismo gradual y esencialmente con la subordinación al convenio que en cada caso tendrá que celebrarse entre la Nación y la provincia respectiva.

En consecuencia, sin perjuicio de que quizás en la discusión en particular puedan proponerse medidas o recaudos que acentúen el resguardo de aquellos problemas que nosotros queremos evitar en beneficio no solamente de las provincias que representamos sino también de la educación, que está por encima de la Nación o de las provincias porque pertenece al pueblo argentino y es el mayor reaseguro para transitar en democracia y libertad, expreso mi opinión favorable al proyecto que estamos considerando.

Sr. Presidente (Brasero). — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Grosso. — Señor presidente: lógicamente preocupa a todos la educación. Su futuro está vinculado íntimamente al destino de la República.

El proyecto de ley que está en tratamiento no hace al fondo del problema. Como se dijo aquí, no responde a una política educativa sino a una política económica y financiera. En este caso la ley, que es de forma, conspira contra lo poco que podemos exhibir en educación.

De algo estoy seguro, señor presidente: de esta manera no se mejora el sistema educativo. Digo esto porque la transferencia compulsiva, no gradual y resultado de imposiciones de organismos internacionales que no están precisamente vinculados a la educación no sólo lesiona a las autonomías provinciales, o sea, a todo el andamiaje constitucional y jurídico de la República. En efecto, esta liberación de cargas económicas a la Nación para atender otras cuestiones tal vez legítimas — aunque no hay otras más legítimas que la educación — pone en peligro buena parte de los servicios educativos ante la inseguridad de las provincias, por sus problemas lógicos, para poder atenderlos.

Se habla de que según las proyecciones de la recaudación las provincias van a recibir más co-participación. Esto es algo aleatorio, señor presidente, pero no lo es la obligación de las provincias de pagar los sueldos a los docentes al fin de cada mes. Los perjudicados, en definitiva, van a ser la juventud, la docencia, los educadores, la República.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, senador Juan Carlos Romero.

Sr. Grosso. — Arreglar las cuentas de la Nación desequilibrando aún más las finanzas provinciales es un recurso fácil pero no es el más adecuado. Por el contrario, es injusto y traerá graves inconvenientes a la Nación, ya que son las provincias las que configuran la República.

Originariamente el único recurso reservado a la Nación era el que provenía del comercio exterior, pero poco a poco se fue avanzando sobre las facultades de las provincias. Así, hoy las provincias sufren las cargas y las imposiciones, se les niegan los recursos y cuando los reciben legítimamente la Nación pretende una imputación determinada, como si se tratara de un tutor, como si tuviera un poder paternalista inaceptable, para quienes manejan correctamente sus finanzas como integrantes de un país federal.

Señor presidente; las provincias se plantean muchos y graves interrogantes: con sus presupuestos, con las prestaciones al sector pasivo, con las diferencias de remuneración que además deberán afrontar aquellas que abonan un sueldo mayor a sus docentes, con la estructura que está obsoleta en todos los colegios nacionales, etcétera. Es decir que se trata de un tema serio y grave en el que no deben primar las urgencias y en donde se debe determinar previamente el costo de la transferencia en forma conjunta y ordenadamente entre la Nación y las provincias, así como un mecanismo que asegure el traspaso gradual y progresivo que evite lesionar a las partes, pero fundamentalmente la calidad de los servicios educativos que hoy están desmerecidos, deteriorados y en trance hacia su desaparición.

Por eso, adhiero a todo lo que manifestó la señora senadora Malharro de Torres, quien lo ha hecho con pasión de docente y con conocimiento de lo que significa la educación argentina; lo hizo en nombre del bloque, representando a la Unión Cívica Radical.

En función de lo expuesto, manifiesto nuestra adhesión a todas sus afirmaciones.

Sr. Presidente (Romero). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Lafferrière. — Señor presidente: este proyecto de ley tiene la trascendencia de las discusiones importantes.

Ingresa a nuestro debate por una ventanilla que quizá no es la apropiada.

Empezamos este tratamiento urgidos porque en el proyecto de presupuesto para el año próximo que ha enviado el Poder Ejecutivo se establece que a partir del 1º de enero de 1992 los servicios educativos serán transferidos a los estados provinciales.

Obviamente, en la discusión sobre el tema educativo, si queremos empezarla desde la ventanilla de lo económico, podemos decir que si hay un lugar por el cual este comienzo es inconveniente es confundiendo lo económico con el presupuesto. ¿Por qué? Porque en realidad cada vez más la discusión sobre la educación tiene un profundo contenido económico pero estratégico, un contenido económico del cual se deriva cuál es el perfil de sociedad que podemos construir, un contenido económico que nos va diciendo si queremos hacer una sociedad con determinadas características o con otras.

Lo cierto es que hoy estamos discutiendo este tema por una presión de coyuntura más que por una discusión estratégica, por el problema, en todo caso, de ver cómo nivelamos las cuentas.

No quiero disfrazarme de ingenuo. He dicho alguna vez en este recinto que en todo caso uno de los aspectos favorables que tiene el país en este momento que vivimos es que los dos grandes partidos políticos han sido gobierno y oposición, enfrentando la misma crisis. Entonces conocemos las mismas presiones; sabemos qué hay detrás de cada proyecto y cómo debe interpretarse cada entrelínea.

También sufrimos las presiones. Cada vez que íbamos a negociar con el Fondo aparecían los temas de Hipasam, SOMISA, Banco Hipotecario, BANADE, Caja de Ahorro, la banca estatal.

Creo que la gran batalla que está librando el gobierno nacional —la que está librando el país— es la batalla económica.

No estamos poniendo palos en la rueda. No hemos obstaculizado ni restado quórum, prestando así nuestra solidaridad política ante la responsabilidad de los hombres que tiene que equilibrar la nave económica de la Argentina. Y aunque no nos guste, comprendemos que haya que poner el petróleo como bien de cambio; que haya que negociar el tema de los trenes, re-

formar el Estado con el tema de los teléfonos y Aerolíneas, o iniciar conversaciones respecto de otros asuntos.

Comprendemos todas estas situaciones, señor presidente. Pero la educación es otra cosa. Lo que hace que nuestra Argentina sea distinta de muchos países hermanos de América latina es justamente la inversión que ha hecho en educación en el último siglo.

Lo que hace que este pueblo tenga el índice de alfabetización que tiene, a diferencia de otros de América latina, es el esfuerzo que muchas generaciones de compatriotas realizaron para que fuese educado. Lo que proveyó la existencia de una clase media que garantice el equilibrio y la movilidad social es justamente lo que llegó de la mano de las escuelas Láinez, de la popularización de la enseñanza media y de la reforma que abrió las universidades a los sectores populares.

La inversión en educación, señor presidente, permitió que nosotros podamos ser legisladores nacionales sin pertenecer a familias pudientes de apellidos patricios, que el actual presidente de la República provenga de una familia humilde de inmigrantes y que su ministro de Economía y de Obras y Servicios Públicos reconozca su origen en una familia de gringos cordobeses.

La inversión en educación en la Argentina fue la base de una sociedad democratizada, o al menos, con un nivel mínimo de dignidad garantizado a todos sus compatriotas.

¿Qué es entonces lo que me preocupa de esta discusión económico-educativa? Que en lugar de discutir la estrategia nacional para construir una sociedad igualitaria estemos analizando simplemente de qué manera podemos esquivar la presión de la coyuntura, sin preocuparnos demasiado por el verdadero tema de fondo. En estos momentos tendría que estar motivándonos la forma de encontrar un sistema científico tecnológico eficaz, cómo lo vinculamos con la producción, cómo hacemos una educación que esté arraigada en cada una de nuestras regiones.

Señor presidente: el mundo en el que estamos viviendo, el mundo que viene, es el de la inteligencia, el de la capacitación. No hay país que tenga garantizado su futuro nada más que con sus reservas naturales. Por eso decía recién que acepto que tengamos que estar discutiendo temas caros a nuestra ideología, como el del petróleo y el del servicio público. ¿Por qué motivo? Porque actualmente la estrategia radica en la inteligencia más que en esas reservas, que constituyen un simple valor de cambio.

La estrategia —reiteró— es la inteligencia, la complejidad del conocimiento, lo que hace capacitar a nuestros jóvenes y al pueblo para que pueda hacer valer su presencia en el mundo. El desarrollo intelectual le permitirá mantener las ventajas comparativas que fue ganando con la inversión operada a lo largo de cien años.

No podemos hablar de educación como si se tratara del petróleo, de los trenes, de los bancos, del BANADE, del Banco Hipotecario Nacional, de SOMISA, de Hipasam.

Días atrás, con la angustia que tenía por sentirme un poquito responsable —como todos nosotros— por la situación del país, le escribí una carta al ministro de Economía en la que planteé esas angustias. Por supuesto, no me contestó; soy apenas un senador. Deshilvanadamente volqué en esa carta los conceptos que acabo de manifestar, y le escribí sobre el drama que sentía, que siento como senador —como seguramente sienten los 44 senadores restantes—; el drama, la impotencia por no poder influir como quisiera, de no poder influir en la estrategia nacional.

Una democracia debe tener en el Parlamento el ámbito intelectual donde plantear los debates; vendría a ser como "las neuronas" del cuerpo nacional.

Si el Parlamento no puede debatir acabadamente estos problemas, el país está funcionando sin aprovechar su inteligencia a pleno. No digo que seamos los mejores, pero por algún motivo en la Constitución Nacional los diputados representan al pueblo y los senadores a las provincias, y entre ambos debemos definir el rumbo que queremos darle al país.

Entonces, señor presidente, cuando se plantea esta situación, cuando veo los esfuerzos que hacen nuestros ya apreciados amigos del oficialismo —como ayer lo hicimos nosotros—, observo el difícil equilibrio que deben hallar para defender cosas que quizá quisieran ver mejoradas, y a la vez intereses que le transmite el pueblo de sus provincias. Así destaco el tesonero esfuerzo de la señora senadora por Tucumán, tendiente a encontrar la forma de armonizar estas cuestiones, al mismo tiempo que demuestra su buena disposición para aceptar algunas modificaciones que se le proponen. Quizás ésta es una posición más cómoda pero también muy necesaria. Es que debemos hacer el mayor esfuerzo para encontrar el mejor dictamen de coincidencia que sea posible.

No hay nada acá que vaya a hacer tambalear las cuentas fiscales. En la misma argumentación

del señor ministro de Economía está claro que las provincias van a recibir más fondos que los que hoy la Nación estaba dedicando a educación. Entonces, no hay ningún problema tan tajante de cuentas públicas, porque paga uno u otro. En la lógica de quienes justifican este proyecto se está diciendo que no habrá menos fondos. Entonces, busquemos todos los reaseguros necesarios para que esto sea así.

Insisto, señor presidente, en que no son los ferrocarriles, el petróleo o el acero: son nuestros chicos, nuestro pueblo del 2000. Y de lo que decidamos hoy con la sanción de este proyecto quizá dependa que dentro de diez años la Argentina se parezca a Bélgica u Holanda o se parezca con todo respeto, a algún país del centro de África. Esto dependerá de cuáles sean las herramientas de capacitación que le demos a nuestro pueblo.

Los argentinos se bancan el sufrimiento de la crisis porque tienen el lomo duro. Pero tenemos que ir preparando a los hijos de nuestros trabajadores, a los hijos de nuestra clase media para que cuando lleguen a la edad de protagonizar la vida tengan herramientas para pelear en este mundo de la inteligencia.

No podemos delinear un país que lo único que prepare sean limpiadores de pisos de una fábrica y que ni siquiera tenga obreros capacitados. No podemos preparar un pueblo que no tenga capacitación para manejar una herramienta agrícola —más o menos sofisticada—, que si no se incorpora nos va a dejar fuera de competencia en el mercado mundial.

La educación es decisiva porque también de ella depende el arraigo —hasta si se quiere, emotivo, sentimental— que nuestro pueblo debe tener con su geografía y con su propia historia.

Necesitamos que nuestro pueblo tenga esa educación que le permita conocer las grandes gestas de su Patria, que en consecuencia le permita saber cómo subir al tren de la Nación y proyectarlo hacia el futuro con orgullo nacional.

A mí no me preocupa la Iniciativa de las Américas —como les preocupa a algunos— si podemos llegar a ella con un pueblo que sepa su pasado, sea consciente de su futuro y esté orgulloso de su personalidad. Pero para eso tenemos que educarlo, porque si no lo hacemos nuestro pueblo va a estar formado por contingentes parecidos a los que viven en los barrios marginales de Nueva York, que no tienen ni siquiera una ley que les garantice la vida. Este es el dramático tema implícito en la discusión de esta tarde.

Tal vez los entrerrianos estamos desde el fondo de la historia caprichosamente motivados por los temas educativos. Mi provincia tuvo la enseñanza primaria obligatoria antes que Europa, que Japón y que Estados Unidos. Allá por los años 40 del siglo pasado ya teníamos la primera escuela primaria obligatoria en Entre Ríos. Nuestra Escuela Normal de Profesores fue la primera del país. El Colegio Nacional de Concepción del Uruguay formó los grandes próceres de la Argentina, que se constituyó como Estado en la segunda mitad del siglo pasado.

Es decir, creemos que la educación es la base de una democracia social que proyecte los valores que dieron origen a nuestra nacionalidad a principios del siglo pasado.

Por eso me atreví a pedir hoy, también en nombre de mi provincia y de su gobernador, que tratemos de encontrar un despacho conjunto. Ello constituirá algo que nos va a hacer sentir orgullosos de nuestras conciencias y que nos pesará menos dentro de algún tiempo.

Las coyunturas económicas —lo sabemos bien los argentinos por el dramatismo de la densidad de coyunturas que hemos tenido desde 1983 hasta ahora— pasan; de una forma u otra pasan. Pero lo que hagamos con la educación de nuestros chicos es muy importante, porque estamos sembrando la semilla del país que preparamos para el 2000, el 2005 o el 2010, para las postrimerías de nuestros días.

Quiero anunciar mi respaldo en general al proyecto presentado y convoco a la miembro informante a que haga el mayor esfuerzo para aceptar todas las sugerencias posibles de una oposición, que como lo ha demostrado estos dos últimos años, no tiene una actitud obstruccionista sino el mayor patrimonio para facilitar las cosas y hacer andar el carro de este país en bien de todos.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Tiene la palabra la señora senadora por Mendoza.

Sra. Malharro de Torres. — Señor presidente: para hablar de este tema en la sesión de hoy he armado mi carpeta con el Orden del Día N° 679, con la copia de la propuesta que voy a formular y la de la carta del señor gobernador de Mendoza.

Pido que por Secretaría se me informe si hay alguna otra iniciativa o dictamen referidos a este proyecto de ley de transferencia.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Por Secretaría se informa que no existe ningún otro dictamen.

Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Posleman. — Es para una aclaración, señor presidente.

Sobre las bancas de los señores senadores se ha distribuido un proyecto que en general coincide con el dictamen contenido en el Orden del Día N° 679, pero que en el capítulo IV ha sufrido muy importantes modificaciones referidas al financiamiento de la transferencia. Se proyecta la modificación de la ley de coparticipación de impuestos a las provincias, tema importante y trascendente. Si es pretensión de la comisión que se vote ese despacho, nuestra actitud hacia el proyecto cambiará sustancialmente y tendremos observaciones que formular.

Sr. Rodríguez Saá. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Posleman. — Sí, señor senador.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — Es para solicitar una aclaración. No tengo la orden del gobernador de Mendoza . . . (*Risas.*)

Sra. Malharro de Torres. — ¡No es orden!

Sr. Rodríguez Saá. — ¿Qué es lo que usted tiene en la banca?

Sra. Malharro de Torres. — ¡No le voy a aceptar, señor senador! ¡No recibo órdenes!

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Ruego a los señores senadores no dialogar.

Sr. Rodríguez Saá. — Mi intención es que nos manejemos todos con el mismo material. Me estoy refiriendo al orden del día que tenemos todos y que estamos tratando. Tengo en cuenta la preocupación manifestada por el señor senador por San Juan así como también la de la señora senadora por Mendoza. Esas también son preocupaciones de los representantes de nuestro bloque. Mi deseo es que coordinemos todas las inquietudes y podamos votar con absoluta tranquilidad según reglas de juego claras.

Quiero proponer un cuarto intermedio antes de la votación en general de manera tal que sepamos con absoluta claridad qué se va a votar y que no haya ninguna emboscada ni ningún otro orden del día que no sea el que se trata. No quiero que la señora senadora me malinterprete.

Sr. Gass. — Pido la palabra.

— Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Ruego a los señores senadores guardar compostura.

Sr. Gass. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Posleman. — Estaba en el uso de la palabra...

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Tiene razón el señor senador por San Juan.

Sr. Posleman. — Le concedo una interrupción al señor senador por Buenos Aires.

Sr. Cass. — Señor presidente: sin ánimo de hacer un cargo a la Presidencia, debo decir que todo lo que ocurre en el recinto es responsabilidad de ella, de la que estaba en el momento en que se repartió en las bancas un proyecto que pareciera que ya lo daban por aceptado — me refiero al asunto que estamos considerando —, porque está dirigido al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Es decir, está redactado como un proyecto con sanción del Senado, que pasa a la Cámara de Diputados de la Nación, pero no tiene firmas...

Creo que no corresponde echarle la culpa al funcionario que repartió este texto, pero quiero saber quién dio la orden de hacerlo.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — El señor senador por San Luis formuló una moción de cuarto intermedio...

Sr. Posleman. — Estaba en el uso de la palabra, señor presidente.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Tiene razón, señor senador. Continúa en el uso de la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Posleman. — Señor presidente: quiero complementar la moción del señor senador por San Luis. Habida cuenta de que estamos sesionando hoy, continuaremos mañana y trabajaremos también el viernes, formulo moción de orden de que se postergue el tratamiento de este tema para el próximo viernes. Creo que es necesario, teniendo en cuenta estas variaciones en el proyecto, que los señores senadores hagamos las consultas pertinentes, aunque sea de manera telefónica, a nuestras provincias. Quiero aclarar, para quienes tienen en su poder este nuevo texto, que se propone una modificación a la ley de coparticipación, determinando porcentajes distintos para la distribución entre las provincias. Las consecuencias de esta modificación no pueden ser apreciadas a simple vista.

Por otra parte, hay una planilla anexa, referida a montos de distribución entre las jurisdicciones provinciales, que me genera algunas dudas porque, a mi entender, es posible que se hayan cometido algunas equivocaciones. En efecto, en esa planilla se habla de que el total de fondos destinados a las transferencias será de 7.112.000.

nuevos pesos del año 1992, lo que creo representan más o menos unos 7 millones de dólares. Sin embargo, según otro informe que tenemos, los fondos relacionados con las transferencias serían de unos 1.300 millones de dólares anuales. Evidentemente, en algún lado hay un error y quiero tener la posibilidad de verificarlo.

En resumen, mi moción es que posterguemos el tratamiento de este tema para la sesión del viernes próximo.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Sánchez. — Solicito al señor senador por San Juan, con el debido respeto por su posición que modifique la moción que ha hecho. Propongo que terminemos el debate y que votemos en general para luego pasar a cuarto intermedio, tal como el señor senador lo ha propuesto, dado que es un ese momento cuando vamos a tener que considerar el problema en forma particular.

Estamos tratando un asunto que es fundamental para la República y por ello resulta necesario escuchar todas las voces. Entonces, una vez aprobado el proyecto en general, propongo que se haga un cuarto intermedio y que luego se continúe hablando sobre la cuestión; seguiremos discutiendo artículo por artículo, de manera que puedan ser aclaradas las dudas del señor senador.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Posleman. — Señor senador: he sido un permanente defensor de la transferencia de las escuelas a las provincias porque estoy absolutamente convencido de que eso le va a hacer bien al país.

Sin embargo, si la transferencia se hace con recursos menguados o sin recursos, esto le va a hacer mal al país...

Sr. Sánchez. — Estoy de acuerdo.

Sr. Posleman. — ...Entonces, como lo que voy a discutir es el tema de los recursos, no puedo estar en condiciones de votar a favor o en contra hasta tanto se aclaren las dudas, porque esto es esencial para que pueda definir mi voto.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Sánchez. — Entonces, altero la sugerencia que hice hace un instante al señor senador por San Juan. Propongo ahora que terminemos el debate y que pasemos a cuarto intermedio; una vez reiniciada la sesión, que votemos el proyecto en general y en particular.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Tiene la palabra la señora senadora por Mendoza.

Sra. Malharro de Torres. — Me parece bien la propuesta de pasar a cuarto intermedio para que aunemos criterios. Pero quiero recordar que vamos a trabajar sobre el orden del día que contiene el dictamen de comisión referido al tema de transferencia de servicios educativos y no sobre cualquier otra cosa.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — Quiero reiterar la propuesta que hice de pasar a cuarto intermedio. Para ello transmito una noticia que ya es de público conocimiento y que tiene que ver con este debate. El Poder Ejecutivo ha prorrogado el período de sesiones ordinarias hasta el 30 de diciembre próximo. Me dicen que el decreto se está protocolizando y que por ello todavía no ha llegado, de manera que no hay certeza formal. Pero es una información que tomo como cierta.

Entonces, esto facilita nuestro plan de labor parlamentaria, que estaba organizado para trabajar jueves y viernes, pensando en que precisamente el viernes concluía el período de sesiones ordinarias, con lo cual, si se convocaba a extraordinarias, solamente podrían ser tratados los proyectos del Ejecutivo y no así las iniciativas de los legisladores.

Dadas de esta forma las cosas, sugiero que terminemos con el tratamiento en general del proyecto en consideración, luego pasemos a cuarto intermedio y mañana, en la reunión de presidentes de bloque convocada para las 11, decidamos qué día y a qué hora continuamos y cuál es el procedimiento más adecuado para ello. De esa manera, haríamos más prolija la labor parlamentaria, facilitando el tratamiento del proyecto.

Si hubiera acuerdo en este aspecto, solicito que aprobemos la moción de pasar a cuarto intermedio, continuando con la sesión hasta concluir con el debate en general.

Luego nos retiraríamos, mañana celebráramos la reunión de presidentes de bloque y ordenaríamos la sesión de mañana o de cuando fuera.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Hay una moción que parece ser compartida por el señor senador por San Juan...

Sr. Cass. — Pido la palabra.

Sra. Gurdulich de Correa. — Pido la palabra.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Cass. — No me concede...

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sra. Gurdulich de Correa. — Señor presidente...

Sr. Cass. — Le cedo el uso de la palabra a la señora senadora por Santa Fe, ya que insiste tanto.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Tiene la palabra la señora senadora por Santa Fe.

Sra. Gurdulich de Correa. — Tenemos algunos temas cuyo tratamiento había sido acordado; por ejemplo, el del gas para ser considerado en primer término. Si pudiéramos tratar esos temas...

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — El cuarto intermedio, si me permite...

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Gurdulich de Correa. — Señor presidente: terminada la discusión en general del tema de educación —que es lo que dije— al no pasar a la discusión en particular podríamos continuar con los temas previstos para hoy.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Considero que ése es el sentido de la propuesta. Hay un orden del día aprobado que entiendo no se puede alterar. Simplemente pienso que ése era el sentido de la propuesta; salvo que habida cuenta de la nueva circunstancia de la prórroga de las sesiones ordinarias se considere conveniente la otra vía.

Ruego a los señores senadores que deseen expresar su opinión, lo hagan a continuación.

Sra. Gurdulich de Correa. — Ese era el sentido de la propuesta.

Sr. Cass. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Cass. — Señor presidente: he comprendido perfectamente la propuesta que formuló el señor presidente del bloque justicialista y creo que la señora senadora por Santa Fe no la ha entendido.

Sr. Velázquez. — Preste atención, señora senadora. (Risas.)

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Ruego no interrumpir al orador.

Sr. Cass. — Seguramente no habríamos tenido inconveniente alguno —y no quiero abrir debate en este aspecto— si no hubiese aparecido este documento, que no sé quién lo puso sobre las bancas, y hubiésemos seguido tratando el tema de transferencia de servicios educativos.

De cualquier manera, me parece correcto lo que manifiesta el presidente del bloque justicialista, de pasar a cuarto intermedio después de concluir con el tratamiento de este proyecto. Y en la reunión de presidentes de bloque de mañana se confeccionaría un nuevo plan de labor. En efecto, hay una prórroga dispuesta por el Poder Ejecutivo. Lo que vamos a discutir alguna vez es si el Ejecutivo tiene facultad de prorrogar las sesiones o es atribución tácita del Parlamento argentino. Pero eso es objeto de otra discusión.

Entonces, con la nueva prórroga tendremos más tiempo para determinar un nuevo plan de labor.

Acepto la propuesta del presidente del bloque justicialista y del señor senador por San Juan.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Aquí se ha formulado una propuesta. Entiendo que hubo coincidencia entre la iniciativa planteada por el señor senador por San Juan y la formulada por el señor senador por San Luis. De todas maneras, ruego al señor senador por San Luis que explique su propuesta.

Sr. Rodríguez Saá. — Que concluya el debate en general del proyecto de transferencia de servicios educativos nacionales, se vote la moción de pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 15 y 30 como hemos pactado, y en la reunión de presidentes de bloque de mañana a las 11 establezcamos y elaboremos el plan de labor parlamentaria a la luz del decreto del presidente de la Nación por el que se prorroga el período de sesiones ordinarias.

Sr. Gass. — Es lo que dije...

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — En consideración la moción del señor senador por San Luis.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Brasesco. — Si me permite, señor presidente...

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — ¡Cómo no!

Sr. Brasesco. — Quiero dejar constancia de que ya habíamos votado el pase a cuarto intermedio hasta mañana. En lo único en que había que ponerse de acuerdo es...

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Lo que se ha votado es la moción del señor senador por San Luis.

Sr. Gass. — Lo que abunda no daña.

Sr. Rodríguez Saá. — Está agotado.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — ¿Cuál es su propuesta, señor senador?

Sr. Brasesco. — Ya está totalmente aclarado, señor presidente.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — En consecuencia, la Cámara ha votado que se pase a cuarto intermedio hasta mañana a las 15 y 30 y que a las 11 se realice una reunión de presidentes de bloque.

Sr. Rodríguez Saá. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — De todas maneras, corresponde que la Presidencia advierta que los señores senadores que quieran seguir haciendo uso de la palabra con relación al tema de la transferencia educativa podrán hacerlo. Cuando se agote el tratamiento en general comenzará entonces el cuarto intermedio.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Esa era, desde luego, la propuesta aprobada.

De acuerdo con la lista de oradores, corresponde que haga uso de la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Posleman. — Señor presidente: el proyecto de presupuesto para 1992 remitido por el Poder Ejecutivo nacional incluyó dos artículos que disponían la transferencia de los servicios educativos de nivel secundario a las provincias. Además, en las partidas presupuestarias proyectadas para 1992...

Sr. Sánchez. — Señor presidente: solicito que se haga silencio para que podamos oír al orador.

—Suenan la campanilla de orden.

Sr. Posleman. — Gracias, señor senador.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Posleman. — Dentro de las partidas previstas para el presupuesto de 1992 se eliminaban las cifras correspondientes al financiamiento de los servicios educativos de nivel secundario y también las correspondientes a los servicios subsidiados de la enseñanza privada. Ante estas circunstancias surgieron iniciativas de varios señores legisladores tendientes a modificar este criterio que nosotros consideramos equivocado; me refiero al hecho de que dos artículos del presupuesto general de la Nación establecen la transferencia de las escuelas, lo cual, como ha sido expresado por los senadores que me han precedido, implica no solamente un proceso de transferencia de inmuebles y gastos sino también la adecuación de los sistemas educativos a las realidades de cada provincia y el cambio de

los estatutos que regirán las relaciones laborales que mantendrán los docentes.

Como decía, varios señores legisladores presentamos proyectos de transferencia de los servicios educativos coincidentes en cuanto a que esta transferencia debe realizarse mediante convenios específicos con cada una de las provincias, y también en cuanto a que debe llevarse a cabo gradualmente, en la medida en que las provincias estén en condiciones de recibirlos.

Esta necesidad de que haya un proceso gradual deriva de que algunas provincias no tienen experiencia en la prestación de servicios educativos secundarios y técnicos; no es el caso de la provincia de San Juan, que está en condiciones de hacerse cargo de una manera más o menos inmediata de estos servicios. Tan así es que desde el momento en que se presentó este proyecto tuvimos en las comisiones respectivas la preocupación de seguir de cerca esta posibilidad de transferencia. En este sentido, se ha constituido en la provincia de San Juan una especie de organismo de consulta entre los sectores del nivel secundario del orden nacional y la autoridad educativa de la provincia, a fin de ir proyectando la transferencia, haciendo las hipótesis de los distintos problemas que se iban a plantear y proyectando cuáles eran las mejores alternativas para que esta transferencia se hiciera sin traumas.

Evidentemente, esta transferencia significa para las provincias un aumento en su costo financiero. Un aumento muy importante que no son sólo los 1.300 millones de dólares en este momento gastados por la Nación en el sostenimiento del sistema; además, representa para las provincias una pesada carga debido a la carencia de la infraestructura adecuada.

La mayoría de las escuelas nacionales están funcionando en edificios precarios, prestados o cedidos por las provincias. Esto significa que ellas van a tener la obligación de mejorar ese servicio y de realizar construcciones sumamente costosas, que en este momento no están en condiciones de afrontar.

Será necesaria también una adecuación de los sistemas salariales. No son coincidentes absolutamente, y ustedes saben que las adecuaciones salariales nunca se hacen para abajo sino siempre hacia arriba, es decir, mejorando al que está más abajo para acercarlo al de mayores ingresos. Esta transferencia sin ninguna duda va a implicar un gasto muy importante que no va a estar presupuestado dentro de los gastos previstos en la Nación.

¿Cuál es el objetivo que persigue la Nación más allá del de orden pedagógico y educativo, del mejoramiento de la administración y la eficiencia en la educación? Hay evidentemente otro objetivo que ha sido aquí expresado por el ministro de Economía de la Nación, cuando fuera interpelado respecto de la relación entre la Nación y las provincias. Ese objetivo, señores senadores, ha sido expresado con toda crudeza. La Nación no está dispuesta a seguir manteniendo estos servicios, y consecuentemente deben ser transferidos con cargo a los presupuestos provinciales, es decir, a los recursos de las provincias. En esa oportunidad, sin ser mi intención polemizar con el señor ministro, le manifesté que pensaba que tenía un error de concepto, que los impuestos coparticipables son recursos propios de las provincias y no una dádiva en su favor que otorga la Nación al entregarlos.

En el sistema rentístico que establece la Constitución Nacional queda absolutamente claro: los impuestos corresponden a las provincias pero por una cuestión práctica de la recaudación los recibe el gobierno federal y luego los coparticipa a ella. Entonces, creo que el Senado debe analizar profundamente, como fiel defensor de las autonomías provinciales, el tema de la protección de los recursos de las provincias.

Esta transferencia significa una disminución importante de recursos para los estados provinciales. Y no es la única. Cuando votamos generosamente el aporte para solucionar la cuestión del sistema previsional, ya hemos disminuido un 11 por ciento de los recursos que les corresponden a ellas. Cuando votamos el nuevo régimen para el financiamiento de la vivienda y el nuevo sistema de reparto de la coparticipación de los impuestos a los combustibles también cedimos recursos que corresponden a las provincias. En este sentido, considero que la Nación debe darle un trato justo a las provincias. ¿Cuál es ese trato justo? Si la Nación va a disminuir su gasto, de la parte de la coparticipación también debe disminuir proporcionalmente el equivalente a este gasto para ser distribuido entre las provincias.

Todos los señores senadores conocen cuál es la situación de las provincias. Algunas tienen mayores dificultades que otras, pero en general todas poseen déficit estructurales en sus sistemas educativos; tienen grandes dificultades para pagar salarios dignos a sus maestros e incluso en algunas oportunidades ha habido atrasos en los pagos y graves problemas en las administraciones provinciales por la carencia de recursos.

Hoy es cierto que los recursos de las provincias han mejorado en el último semestre, y según se proyecta van a seguir haciéndolo durante 1992. Pero ellos les son necesarios a las provincias para recuperar un atraso de más de quince años, en que las hiperinflaciones les restaron fondos. Cuando la Nación emitía, hacía uso del crédito y endeudaba al país, no coparticipaba a las provincias, las cuales se iban endeudando. Así, todas ellas están arrastrando profundos déficit no sólo económicos sino también estructurales. En efecto, los caminos están deshechos, no ha habido desarrollo. Con la estabilidad y con una mayor recaudación, que permitirá que las provincias cuenten con más recursos, se plantea la oportunidad de dar posibilidad de desarrollo a las economías regionales prestando mejores servicios.

Entonces, creo que es necesario poner énfasis en dos aspectos.

Quiero decir con toda claridad que comparto el fondo del proyecto de la señora senadora Rivas, que ha establecido toda una metodología y una modalidad para que mediante convenios se prevean todas las dificultades que van a tener en su relación la Nación y las provincias a raíz de los servicios educativos. Coincido en que esto será positivo para el país desde el punto de vista educativo. Habrá una mayor eficiencia y un mejor aprovechamiento de los escasos recursos por una administración cercana que va a respetar las inmediatas necesidades de la gente.

Pero en este esquema debemos reflexionar profundamente los señores senadores. En las disposiciones del dictamen que figura en el Orden del Día N° 679 se dice que esto se va a financiar con las partidas presupuestarias correspondientes. Pero hay un grave riesgo para las provincias de que esas partidas no estén previstas o sean insuficientes y no se pueda financiar el sistema.

Por otro lado, en el otro texto, que todavía no sabemos si va a ser una propuesta de la comisión, también se presentan grandes riesgos. A mi entender tiene dos aspectos: uno positivo y otro negativo. El aspecto positivo es que se acepta la idea que fuera propuesta en el proyecto que presentamos con el señor senador Bravo sobre el financiamiento, donde se disponen los recursos de coparticipación. La idea se aceptó, pero ha sido desvirtuada absolutamente en cuanto se establece un sistema que no ofrece ninguna claridad para el manejo de los recursos de coparticipación que como tal debe ser transparente y automático.

Allí se establece que de acuerdo con las estimaciones de recaudación —algo que de ninguna

manera puede ser verificado con las recaudaciones reales— la Secretaría de Hacienda o el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos van a disponer la remisión según los mecanismos que allí se establecen.

De una vez por todas las provincias no deben seguir mendigando los recursos ni pidiendo las transferencias. Deben recibir los recursos puntualmente, conforme se recaudan y de acuerdo con lo que establece la ley 23.548, de coparticipación.

En definitiva, señor presidente, creo que haríamos al país y sobre todo a la educación un daño tremendo si aprobamos un proyecto de ley de transferencia que no asegure el financiamiento de la educación en las provincias. Porque ellas tienen su sistema de educación, que sumado a estos nuevos gastos provocaría tremendas dificultades y problemas que van a repercutir en contra de la ciudadanía.

Oportunamente fijaré la posición de mi bloque frente a este proyecto de ley. Lo haré cuando se reconsidere la posibilidad de introducir modificaciones.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Brasesco. — Señor presidente: trataré de ser lo más breve y concreto posible.

De acuerdo con lo que establece el artículo 5° de la Constitución Nacional, las provincias deben garantizar el sistema municipal, la administración de justicia y la educación primaria. Esta es la garantía que exige la Constitución para el ejercicio de la autonomía en cada provincia.

Por su parte, la Nación tiene la obligación de asegurar la instrucción pública media, terciaria, superior y universitaria y de acudir en socorro —cuando lo crea conveniente— de la educación primaria en las provincias. Así, el caso más palpable en la historia argentina es el de la ley Láinez.

Esta circunstancia, señor presidente, determina que es una facultad concurrente de las provincias y de la Nación lo inherente a la instrucción pública media, terciaria, superior y universitaria. Es una obligación esencial del gobierno de la Nación atender esos niveles de educación mientras que para las provincias la constituye el garantizar la educación primaria.

En cuanto a las cláusulas constitucionales —algunas de las cuales se han indicado a través de los discursos de los distintos senadores preopinantes—, puedo citar la Constitución de 1933, vigente en mi provincia, que establece un índice del 25 por ciento a dedicar a la enseñanza pri-

maria y está respaldando de alguna forma la necesidad de garantizar el ejercicio de la autonomía, en virtud del artículo 5º de la Constitución de la Nación.

El gobierno nacional ha sido claro. Tiene que nivelar su déficit fiscal. La recaudación no le alcanza aunque la aumente. Necesita el ingreso de lo producido por las privatizaciones y recortar el gasto, circunstancia por la cual directamente, en una actitud unilateral, decide transferir todos los establecimientos de enseñanza a las provincias, sin considerar diferentes situaciones en cada una de ellas, incluso, sin hacer distinciones en cuanto a capacidad técnica y docente. Es necesario contar con la infraestructura necesaria desde el punto de vista técnico para enfocar una educación a nivel secundario. Además no puede dejar de tener en cuenta las posibilidades presupuestarias.

La Nación no puede desde ningún punto de vista indicar pautas presupuestarias a las provincias. Eso es claro, concreto y terminante. Esto da lugar a que si la Nación desea concretar esta transferencia debe mediar un convenio entre ella y cada una de las provincias. Indudablemente se tiene que asegurar primero su ratificación por una ley marco y luego por las Legislaturas provinciales.

La transferencia debe ser gradual y tener financiación, pero no como propone el señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos, quien es un técnico pero parece que conoce poco sobre la Constitución Nacional, porque cada día tropieza con los escollos constitucionales. No puede decirse de ninguna manera que con el aumento de la coparticipación federal se subsidiará y cumplimentará la financiación de los establecimientos que se transfieran. ¿Por qué? Porque el régimen rentístico de nuestra Constitución es bien claro, aunque desgraciadamente hemos caído en una ley de coparticipación que algún día tendremos que hacer desaparecer en virtud de algún acuerdo interprovincial, federal y fiscal que contemple que cada una de las provincias recaudará sus impuestos genuinos. Luego, también se deberán contemplar los socorros a las provincias que no alcancen a cubrir sus necesidades a través de la prescripción de la Constitución, que dice que el Tesoro de la Nación socorrerá a las provincias que lo necesiten.

En esto la Nación debe dar pautas claras de financiación.

A continuación, señor presidente, le voy a hablar de mi provincia, que se jactó históricamente de haber hecho de la instrucción pública una

verdadera bandera, de la que no ha claudicado ninguno de los gobiernos que hemos tenido.

De la Dirección Nacional de Educación Media nos transfieren 26 establecimientos, que representan 19.077 horas de cátedra, un importe de 3.295.862.379 australes; 542 cargos docentes, con un importe de 1.821.103.778; cantidad de personal no docente, 195, con un importe de 508.764.564. El total de la partida es de 5.625.730.721.

La Dirección Nacional de Educación Superior nos transfiere 22 establecimientos con un total de 8.700.009.961; la Dirección Nacional de Educación del Adulto, también con 22 establecimientos, con un importe total de 441.682.010. La Dirección Nacional de Educación Agropecuaria, transfiere 8 establecimientos por un importe de 976.847.772.

La Dirección Nacional de Educación y Recreación transfiere a mi provincia 6 establecimientos con un total de 582.054.794.

Las direcciones no especificadas, 11 establecimientos, por un total de 354.379.864.

El total de establecimientos que se transferirán es de 95. La cantidad de horas cátedra, 44.162, por un importe de 8.055.403.277, con 2.181 cargos docentes que representan 7.051.818.342; además, se transfieren 596 cargos de personal no docente que implica un total de 1.573.483.503. El importe total de todas las direcciones mencionadas es de 16.680.705.122.

Además, dentro del Consejo Nacional de Educación Técnica se transfieren 22 establecimientos del ENET, 4 centros de formación profesional y 6 misiones monotécnicas. Es decir, que del Consejo Nacional de Educación Técnica son en total 32 establecimientos.

Se advertirá, señor presidente, que mi provincia —aun cuando tiene una capacidad educativa históricamente desarrollada, con muchos establecimientos, inclusive de enseñanza media y de escuelas superiores— no estaría en las condiciones técnicas necesarias para crear la infraestructura educacional de 32 establecimientos de educación técnica, dentro de los cuales también hay institutos superiores.

Todo esto demuestra que no se trata solamente de una cuestión de dinero sino que también tiene que ver con la política educacional. También expresa la necesidad de un gradualismo y de que los gobiernos provinciales acuerden individualmente con el nacional cómo se tienen que hacer las transferencias y cuáles aceptan. Asimismo, todo esto pone de manifiesto la necesidad de una ley de financiamiento

clara y concreta que no dependa de la coparticipación federal.

Esto que acabo de decir resume el pensamiento unánime de todos los legisladores de la provincia de Entre Ríos, del actual gobierno provincial y del gobernador recientemente electo. No se trata del pensamiento de un legislador de un partido político; es el pensamiento pluripartidista de los hombres que tienen representación en el Congreso de la Nación, de aquellos que en este momento tienen la responsabilidad de la conducción de los negocios públicos y de quien ha sido electo gobernador por el voto del pueblo y que desde el 10 de diciembre tendrá que dirigir los destinos de mi provincia.

Voy a apoyar el planteo formulado por la señora senadora por Mendoza, en la tesitura de que constituye un camino intermedio hacia lo que tendría que ser el objetivo ideal de una transferencia.

Con estas pocas palabras, señor presidente, dejo sentada la posición de los legisladores de la provincia de Entre Ríos, que hemos tenido reuniones permanentes con las autoridades del gobierno provincial, con las que consensuamos varios puntos fundamentales: ley especial y no la de estar incluida en el presupuesto; gradualidad en la transferencia; acuerdo con la provincia; ley provincial y financiación asegurada, marginada totalmente de lo que le corresponde a la provincia por la coparticipación federal, es decir, de todo aquello que provenga de recursos genuinos y de impuestos, que de acuerdo con el sistema rentístico establecido por la Constitución Nacional, le corresponden a mi provincia y que debe aplicarlos a sufragar otros gastos que son exigidos por la propia Constitución y por la propia política presupuestaria del estado provincial.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Sánchez. — Honorable Cámara: voy a buscar palabras para hacer mi exposición. Digo esto porque la inmensa alegría que me embarga hace que no pueda ordenar bien el léxico que debo emplear.

Esta es una reunión trascendente para la vida de la Nación. Digo más: es vital para su vida y su futuro.

Indudablemente, señor presidente, todo esto lo hemos venido hablando a través de los tiempos, después de que se recuperan las instituciones de la República a partir de 1983. Con el correr de los años vamos aventando todas esas aventuras absurdas y descabelladas por las que

se pretende imponer la razón con la brutalidad de la fuerza, sin tener en cuenta que más tarde o más temprano primará la razón, que es factor fundamental en las personas.

Hemos venido hablando de esta crisis y seguiremos refiriéndonos a ella. Algunos han defendido un proyecto que data de 1890; otros, no lo han aplaudido. Hemos hablado del transcurso de la historia en estos últimos cien años dedicados a la búsqueda de un proyecto real de país. Hemos hablado de la Revolución del Parque, de la Unión Cívica, de la abstención, de la reforma, de un ciclo que para no personalizar, porque no debemos hacerlo, corrió desde 1943 hasta 1955, en que más allá de todas las críticas que pueden formularse no podemos negar que existía un proyecto de país, un proyecto de nación inserta en un continente descubierto hace 500 años.

Entonces es muy fácil decir, como lo hemos dicho hasta el cansancio, que esta crisis se generó espontáneamente sin empezar a determinar los hechos que se sucedieron en la vida de la Nación a través del tiempo, en los que se fueron acumulando errores sin que se reformara nada y llegamos a este estado de agotamiento en que se encuentra hoy la República, y que denominamos crisis.

No se trata de enjuiciar a los gobiernos que nos precedieron; se trata de analizar los hechos para determinar los errores y los aciertos, para corregir los primeros y fortalecer los segundos.

Uno de los aspectos fundamentales que hacen a la vida de un pueblo es la educación y la cultura. Fíjense la tremenda importancia que tiene esto. Aquí no hay una acusación o una indiferencia total por el tema. Sólo estamos discutiendo el punto de vista económico: la sustentación de un ministerio del ramo, y no hablamos del fondo de esta cuestión.

Para esto último es necesario que determinemos dos aspectos: uno, el de la educación, y el otro, el de la educación dentro de la cultura. En este análisis, y sin pretender hacer cargos, debemos determinar si somos un pueblo educado e instruido o si somos un pueblo culto. Porque la cultura no sólo comprende la acumulación de conocimientos matemáticos, geográficos, históricos o de cualquiera de las otras materias que se estudian —que, por cierto, son importantísimos— y que también forman parte de un inserto en el campo de la cultura, ya que con ésta realmente valorizamos el espíritu y el ser de una Nación que tiene su historia, su presente y que en base a ello va proyectando su futuro.

Cuando hablamos de estas cosas lo hacemos con nostalgia respecto de las medidas que en algún momento se tomaron en el país en favor de la educación.

Entre mis tantos oficios tuve la suerte de ser maestro de escuela rural, lo que me permitió convivir con la miseria en todas sus formas. También me permitió ver a los venerables maestros —mayores que yo, porque en aquel tiempo era un niño— que se habían quedado en el proceso de la Historia, sin que esto implique hacerles un cargo.

Es mucho lo que podemos hablar sobre esto aunque estén vacías las bancas y no haya público. Estamos debatiendo el resorte fundamental de un país y de un pueblo que tiene vocación de nación, que quiere realizarse como tal para que la trascendencia del hombre sea posible y para que dentro del grado de cultura que podamos obtener sepamos tender la mano hacia los desposeídos, sumergidos y marginados por cualquier causa.

El problema educativo no puede ser medido a través de un parámetro económico, aunque sea necesario considerar esta cuestión. Podemos abundar en numerosos detalles que pueden resultar tediosos pero que en su acumulación pueden ayudar a ir clarificando el problema, de manera que encontremos alternativas válidas para concretar nuestros objetivos.

No se trata de que sólo sepamos las cuatro operaciones básicas y leer y escribir. Necesitamos también tener acceso a los distintos grados de la educación. A pesar de que la Constitución así lo establece, en la práctica siempre existen numerosos inconvenientes para que ello sea posible.

La transferencia de servicios educativos a las provincias constituye un elemento importante en el proceso de cambio real que estamos viviendo; sin embargo, nos hace cosquillas y nos plantea dudas. En efecto, están estos problemas: de dónde vamos a sacar los fondos previsionales, qué vamos a hacer con los edificios obsoletos que se transfieren, cómo pagaremos los sueldos y cómo haremos los convenios que forzosamente las provincias deberán suscribir con la Nación.

Todo esto es muy importante pero no lo principal. Aquí hay varios nudos gordianos frente a los cuales sólo tenemos dos caminos: los cortamos de un tajo y saltamos hacia el futuro o entramos a seguir buscando una serie de mecanismos dilatorios que no hacen más que retrasar el avance de la Historia. Por eso hablamos de medidas graduales y de una serie de factores,

que si bien pueden ser válidos, la urgencia de los tiempos que vivimos no permite que nos detengamos más en ellos, porque si continuamos así seguiremos retrasándonos cada día que pasa.

Veamos hasta dónde ha llegado el sistema educativo, hoy totalmente erosionado. Hay cosas que están pasando ahora y que quince, veinte o treinta años atrás eran inconcebibles. Me refiero a que un adolescente pueda levantarle la mano a su maestro, por más razones que pudiera tener para hacerlo.

Este es el resultado de una supuesta educación, de una cultura perversa, porque no se enseñan los valores morales que son eternos y porque no se avanza sobre la vida ética y honesta. Estamos viviendo atosigados por todos esos medios de comunicación, que como noches atrás lo señalara, son formadores de opinión, y en este caso sólo están formando la opinión de la competencia a cualquier precio.

Debemos considerar la crueldad a que asistimos todos los días, que no es sólo la vejación, el insulto o el hecho delictivo; es la marginación de niños que únicamente transitan la escuela de la calle, que es la escuela de la delincuencia. Es la marginación de niños abandonados que no sienten el calor, el amor de sus madres y padres, de su familia en definitiva.

Este es el problema, señor presidente. Urgentemente debemos dictar la ley de educación porque las transferencias, que son muy importantes y valiosas en sus efectos económicos, pasan a segundo término.

Voy a distraer la atención de la Cámara, pese a la fatiga que todos sentimos por la duración de esta sesión, haciendo una ejemplificación para que veamos cómo se puede manejar esta cuestión. Quisiera que no fuese mi provincia, señor presidente, sino que fuera otra la que sirviera como ejemplo. Pero tengo que citar a mi Rioja, que es la primera provincia —repito, señor presidente, la primera provincia— a la cual se le transfirieron las escuelas nacionales en un convenio que la provincia firmó con el gobierno de la Nación, dejando perfectamente establecida la transferencia de los edificios y la asistencia económica para pagar los sueldos, así como también el traslado de los aportes previsionales desde las cajas nacionales a la de la provincia.

En mi provincia, señor presidente, los docentes dentro de la miseria que ganan están mejor pagados que en cualquier otra. En mi provincia, señor presidente, los docentes tienen el 82 por ciento móvil en su jubilación. En mi provincia, señor presidente, hemos fundado esta-

blecimientos secundarios en las cabeceras de todos los departamentos para que los niños tengan la posibilidad de acceder al ciclo secundario, y por lo menos terminar el ciclo básico. En mi provincia ocurre que por una ley se exige a quienes ingresan en la administración pública para cubrir cualquier cargo, desde el modesto de ordenanza hasta lo que fuere, la condición de haber cumplido con el ciclo básico.

También enseñamos inglés, señor presidente, no porque nos guste el idioma o nos gusten los ingleses o no, sino porque se trata de un idioma de tipo universal que se extendió a través de los tiempos por la acción de los piratas. Y se dicta cuando hay quien lo haga, señor presidente, ya que no siempre se lo encuentra.

Señor presidente: la de La Rioja es la única universidad provincial que existe en el país y ha conseguido, a través del esfuerzo de sus habitantes y de sus estudiantes, que se reconozca validez nacional a los títulos que otorga. Esa universidad fue vejada, castigada durante la dictadura militar, rompiéndonos nuestros equipos de profesores con esa absurda calificación de izquierdistas, equipos que lentamente estamos tratando de recuperar.

Todo eso hemos hecho, señor presidente, en la provincia de La Rioja. Y, ¿por qué vamos a tener miedo de que en este momento nos transfieran las escuelas secundarias? Las vamos a recibir gozosos en la medida en que pactemos honesta y concretamente con la Nación para la asistencia económica, para poder solventar los gastos que esto nos demande. Y también, señor presidente, para que no nos quedemos más en el tiempo, para que la universidad tecnológica —que ya estamos organizando— sea la concreción real de un elemento educativo para los tiempos que vienen.

Esto es lo que necesitamos para el país, y por ello la transferencia desde el aspecto económico y material pasa a segundo plano.

No puede ser que el Japón, que tiene que aguzar el ingenio porque la necesidad así se lo exige, produzca tres o cuatro veces más arroz que la Mesopotamia, de la cual usted es oriundo, señor presidente. No podremos avanzar por el camino que lleva al progreso tecnológico por medio de declamaciones absurdas y a veces ridículas. Las palabras ya no sirven porque la urgencia de los tiempos nos demanda hechos. Hechos son amores y no buenas razones. Ya hemos producido muchas razones y las hemos expresado en las trincheras de las calles o donde hayamos tenido que actuar. Vamos a los hechos; esto es impostergable, señor presidente.

Esta medida va a transformar al país siempre y cuando las provincias se preocupen por jerarquizar la condición del docente, para que no sufra la humillación de salarios de hambre que lo obligan a pensar en otras cosas y dejar de lado la actitud propia del magisterio, llevándolo a un segundo plano y concibiéndolo como un "rebusque" y no como el objetivo principal.

Es imprescindible que dictemos los programas que el país necesita realmente. No voy a defender a mi país si no lo conozco, aunque me hayan parido en él. No puedo defender a mi tierra si no sé cuál es el dolor de los jujeños o de los hombres de la Puna. No puedo defender a mi país, señor presidente, si no sé qué pasa en el mar epicontinental, donde se está depredando la fauna ictícola, fuente de riqueza, pero también fuente de alimentación para los tiempos que se vienen.

Hace un rato hablábamos de la provincia de Santa Cruz. Votamos un proyecto y quizás hubiéramos arrimado un peso a una colecta. Parecería que así descargamos nuestras conciencias, mientras el drama es que esta mesa que es la República está afianzada en el Sur, está tambalendo al estar débil una de sus patas. ¿Cuántas veces nos ha señalado aquí el señor senador Sapag, digno representante del país y de su provincia, las enormidades que se cometen con la riqueza de una provincia que podría estar floreciente aun sin contar con elementos no renovables y que podría generar riquezas para las generaciones futuras?

Este es el drama de la cultura nacional, de una cultura que a veces nos aterra cuando se manifiesta en algunas actitudes de los hombres, y sobre todo de los hombres ilustrados. Será por aquello que alguna vez dijo el Mahatma Ghandi con esa mística fabulosa: "Temed de la dureza de corazón de los hombres cultos".

Necesitamos el esfuerzo de todos. No se trata solamente de sancionar una ley. Se trata de que la comunidad se movilice. Si un maestro no tiene dinero para comprar tizas, ¿no puede la comunidad hacer el sacrificio de movilizarse para mantener una escuela?

En este bendito país nuestro tenemos enseñanza gratuita desde el jardín de infantes hasta el nivel terciario. Y resulta que no tenemos un mercado de trabajo para nuestros profesionales, que se nos van. ¿Cuánto nos cuesta cada médico, cada ingeniero, cada arquitecto que se va del país? ¿Cuánto nos cuesta este hueco que deja en el país para ir a servir a otras latitudes donde las condiciones son mejores? ¿No estaremos, señor

presidente, asistiendo a un sistemático ataque para destruir el espíritu argentino? ¿Cómo es posible, señor presidente —y esto lo digo con el dolor del alma porque en esto corrió sangre—, que cuando se desarrollaba el conflicto del Atlántico Sur, cuya fecha recordamos disimuladamente, y tímidamente había quienes tenían las valijas hechas para irse mientras nuestros hermanos peleaban y morían, y mataban defendiendo un derecho que por los elementos con que contamos tenemos la convicción de que es nuestro?

¿Cuándo nos han enseñado en la escuela —y no es un cargo a los maestros y profesores, de quienes venero su memoria porque me enseñaron a leer y escribir y fueron un poco mis padres—, usando los programas correspondientes, lo que es el país? ¿Cuándo nos han enseñado el hecho real de las invasiones inglesas, el porqué de ellas? ¿Cuándo nos han enseñado el problema de las Malvinas, que tenía más de cien años? ¿Cuándo nos hablaron del problema del Beagle? ¿Cuándo nos hicieron conocer todo lo que hace a la geografía de nuestro país, económica e histórica, sin entrar en absurdos revisionismos, como siempre digo?

Así se formaron los conceptos de que acá están los buenos y en el otro lado los malos. De esa manera se ha llegado a señalar en mi provincia a un bárbaro, como calificaban en su época y a través del tiempo a Facundo Quiroga. Pero no se dice que en un modesto pueblo, Atilas, fundó y edificó una escuela cuyas ruinas se conservan.

Así es como vivimos entre mentira y mentira en esta larga cadena de infamia en la que vamos distorsionando el alma nacional, que se preocupa —y me parece bien— por si tal o cual persona que es campeón en tenis, fútbol o lo que fuere triunfa, sin pensar que hasta en eso falla la educación. Quiero que los 33 millones de argentinos a través de sus aptitudes practiquen algún deporte, aunque tenga que resignar un campeón.

Queremos ser los campeones de la libertad. Queremos ser los campeones de la democracia real. Queremos ser las personas que transitamos por el continente y por el mundo sembrando la semilla del amor, de la solidaridad, para que los hombres dejemos de matarnos bárbaramente en las guerras que siempre nos inventan.

Todo esto es problema de educación. Por eso no me preocupa aquello de que un peso más o menos quede librado a que cada gobernador pelee lo suyo para asegurar el financiamiento de lo que va a recibir.

También creo que debe existir el compromiso de cambiar los programas enciclopedistas y dirigirlos a lo que es real, partiendo de la Nación, del pueblo, el continente y el mundo, que se nos achica todos los días por el signo de la velocidad.

¿Cómo es posible, señor presidente, que nuestros laboratorios no entren decididamente en el campo de la biogenética para la transformación de los elementos y el logro de mayores producciones? ¿Cómo es posible que todo el esfuerzo que se ha hecho se pretenda rifar, como es el caso de la investigación realizada por el INTA?

De esta manera, aunque no muy ordenadamente, vengo señalando los distintos problemas que hacen a nuestro país, los problemas reales, los que condicionan a este país centralizado que tenemos, que no permite el desarrollo armónico en todas las regiones.

Sólo será posible solucionar estos problemas cuando dictemos una ley real y acorde con las necesidades del país y su proyección futura.

Esto es importante, más que el problema económico, que de alguna manera lo vamos a poder solucionar.

Esto es como lo describo, repito, porque a nosotros en mi provincia nos pasó lo mismo. Allí nos faltan establecimientos secundarios, pero no tenemos analfabetos y muy pocas escuelas-rancho. Pero todo eso se ha logrado sobre la base de sacrificios, de la dureza para soportar las inclemencias que la vida nos da para poder obtener logros.

¿Y qué estamos declamando? ¿Hasta cuándo, señor presidente, vamos a seguir con la guitarra en la mano, folkloreando los problemas del país, debatiendo si una provincia es más o menos que otra? En las distintas épocas el país se hizo con todas las provincias. El país es uno y dentro de él están las distintas modalidades que existen por razones geográficas y climáticas, entre otras. Este es el fondo de la cuestión. Este es un proyecto de ley real de educación y estoy seguro de que cada provincia, dentro de las directivas que la Nación dictará para vigilar ese proceso, va a resultar una Nación real y culta, una Nación a quien nadie pueda engañar, porque cuando se tiene un hombre culto se terminan los esclavos. En efecto, señor presidente, no hay esclavos con un pueblo culto. La cultura es la que más tarde o más temprano rompe todas las cadenas que ahorran al ser humano.

Y los ejemplos los vemos todos los días. El ejemplo concreto en estos últimos tiempos lo tenemos con ese monstruo que se cayó, que era el

muro de Berlín. de esa forma quedó como resultado el derrumbe del absurdo comunismo en Rusia. Allí aprendieron a leer y a escribir, con lo que terminó la condición de esclavos de todos los tiempos del pueblo ruso.

No podemos esperar más, no podemos postergar más este accionar si realmente queremos dejar el sello de la trascendencia a través del paso del tiempo. Por eso hay que aprobar este proyecto de ley en general y discutirlo en particular teniendo en cuenta lo que aquí han planteado con muchas razones los señores senadores. Ellos han expuesto sus temores, que también deben ser contemplados por el articulado de esta norma.

Señor presidente: por primera vez me he excedido tanto en el tiempo y por primera vez manifestado esta tremenda alegría de estar justo en este reto de la historia para hacer la Argentina que soñé siempre, la Argentina que soñamos los argentinos, para hacer este continente abrazado y unido al que poca atención se le presta desde el gobierno nacional, no sólo del actual, que tiene signo justicialista, sino también de los anteriores.

Digo esto porque he sido delegado del Senado ante el Parlamento Latinoamericano junto con un ilustre ciudadano que nos honra con una banca en este cuerpo, que es el señor senador Luis León. Allí hemos peleado y expuesto nuestras posiciones. Allí se nos respeta, pero muchas veces desconfían porque también, como consecuencia de la educación distorsionada, tenemos el signo de ser sobrados y de creernos los mejores.

Aquí estamos. Esto se arregla con trabajo, con sudor, y con una educación adecuada a la realidad del país. Por eso es importante y trascendente este proyecto de ley porque aquí cambia la vida del país en tanto y en cuanto tengamos espíritu de cambio y el argentino se decida a transformar su Argentina.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Dado que se ha agotado la lista de oradores, se pasa a cuarto intermedio hasta mañana a las 15 y 30.

— Son las 21 y 49.

MARIO A. BALLESTER.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.